

SEGUNDA PARTE

**LA NATURALEZA POLITICA
DEL CHAVISMO**

INTRODUCCIÓN

SEIS COMENTARIOS PRELIMINARES

Examinar la naturaleza política del chavismo no nos parece una tarea sencilla. A pesar del esfuerzo hecho por seguidores suyos, por analistas políticos, por opositores críticos y por quienes en el país han asumido el oficio de “chavólogos”, hemos preferido en nuestro estudio seguir el camino de una elaboración intelectual a partir de la apreciación empírica de los trece años que van desde el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992 hasta el momento en que está cumpliendo seis años el Gobierno del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Y antes de llegar a la descripción de las características del chavismo que hemos logrado apreciar, nos ha parecido pertinente, como introducción a la segunda parte del ensayo, formular los siguientes seis comentarios preliminares.

1 **Sobre el “código genético” del régimen del teniente coronel Hugo Chávez Frías**

Según el decir y el escribir de los biólogos, los seres humanos estamos marcados durante nuestra existencia por el código genético que hemos recibido de nuestros progenitores. La vida en socie-

dad tiende de manera incesante a modelar, conforme a los patrones culturales dominantes, muchos de los rasgos con los que nos identificamos, pero, al final, el gobierno íntimo de nuestras vidas está predeterminado. La sociedad trata de corregir, a veces con un éxito aparente, lo que a la postre es una diversidad individual incambiable.

Los procesos sociales también parecen marcados por un acta de nacimiento, por una marca de fábrica que se hace imborrable con el transcurso del tiempo. Y es éste, precisamente, uno de los asuntos que se discuten a propósito de la correcta identificación del régimen que encabeza el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Quienes enjuician la perspectiva histórica de la acción del presidente Chávez, vacilan al identificar el código genético de la llamada Quinta República entre el 4 de febrero de 1992 y el 6 de diciembre de 1998. Sin que falten aquellos que de buena fe creen que el origen de todo está en los actos y en los escritos de Simón Bolívar, en las reflexiones de Simón Rodríguez y en las acciones guerreras de Ezequiel Zamora.

Quienes se inclinan a creer que los rasgos estructurales del gobierno que encabeza Hugo Chávez Frías deben buscarse en el hecho de su elección popular y en su actuación como Presidente, se detienen a subrayar los rasgos siguientes: 1) el origen democrático del mandato que ejerce el nuevo líder; 2) la apelación permanente al “soberano” como fuente única y última de la cual dimana el poder que ahora tiene; 3) el respeto que puede observarse a las formalidades, sobre todo legales, de un sistema democrático, y 4) la renuncia declarada al uso de la fuerza y el prometido respeto a las reglas de juego del orden establecido antes de su elección como premisas para proceder a la transformación de ese mismo orden.

Quienes, por el contrario, estiman que el código genético del chavismo hay que buscarlo en el 4 de febrero de 1992 argumentan: 1) que ese día hubo la violación a un juramento y se apeló a las armas para derrocar al Gobierno legalmente establecido en contra de las normas constitucionales rectoras de la materia; 2) que en aquel momento hubo una manifestación inequívoca de que para los entonces insurgentes y hoy gobernantes la fuerza era la forma de asumir el poder; 3) que el alzamiento del 4 de febrero de 1992 fue la culminación de un trabajo de diez años, adelantado por una logia militar

que integraban e integran unos convencidos de su predestinación, y 4) que las ejecutorias del gobierno nacido el 6 de diciembre de 1998 se han apoyado, en lo sustancial, en hombres formados por la institución militar.

—

2 **Sobre el “bloque de poder” en la Venezuela de hoy**

A raíz del derrocamiento de la dictadura militar presidida por el general Marcos Pérez Jiménez se constituyó en Venezuela un poderoso “bloque de poder”. Se trataba de asegurar una sólida base de sustentación a la renaciente democracia mediante un acuerdo nacional del que formaron parte las fuerzas políticas y sociales que habían encabezado la batalla por el restablecimiento de las libertades. Este “bloque de poder”, al cual hemos tenido ocasión de referirnos antes, presidió, en lo fundamental, la experiencia política venezolana desde el 23 de enero de 1958 hasta el 2 de febrero de 1999. A partir de esta última fecha, un nuevo “bloque de poder” ocupa el primer plano de la escena política nacional.

A diferencia del “bloque de poder” de 1958, cuando los partidos políticos eran el mascarón de proa, el componente principal del actual “bloque de poder” es la Fuerza Armada. El núcleo primigenio de la fuerza política dominante de la actualidad nació del seno de aquella como Movimiento Bolivariano Revolucionario. De la Fuerza Armada ha salido el actual Presidente de la República, su Comandante en Jefe. Muchas de las posiciones claves de la administración central de este gobierno están ocupadas por oficiales activos y retirados. Una parte de los gobernadores electos formó filas en la oficialidad que participó en las intentonas golpistas de 1992 o se trata de integrantes del mundo militar que abiertamente ha abrazado el llamado “proceso”. Y aun cuando el universo de los militares no pueda escapar a las contradicciones y alineaciones políticas que se producen en la sociedad y haya tenido lugar una escisión en el núcleo militar inicial, mientras la situación social no se exacerbe y el cuadro general del país no se deteriore peligrosamente, la institución castrense, en razón de sus principios integradores se mantendrá alineada alrede-

dor de quien comanda al país y a la Fuerza Armada.

En este “bloque de poder” también están presentes unas fuerzas político-partidistas, pero con un carácter distinto. Por puras conveniencias electorales, el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR) se mimetizó en el Movimiento V República (MVR), convertido hoy en el partido oficial de Venezuela. Su tarjeta y no su organización le han permitido recoger, en las distintas elecciones y consultas en las que han participado Chávez y sus seguidores, el descontento y el anhelo de cambio en sectores importantes de la población. Luego, por multiplicación aluvional propiciada hábilmente desde el gobierno, aun cuando sin cohesión orgánica ni doctrinaria, han comenzado a aparecer el “sindicalismo bolivariano”, la “juventud bolivariana”, las “mujeres bolivarianas”, los “profesionales bolivarianos” de todos los oficios y carreras. En torno a ese tronco burocráticamente frondoso se han cobijado otros partidos que se autocalifican de revolucionarios o que se han arrogado la representación de los intereses populares aun cuando en conjunto no sean capaces de asegurar el encuadramiento del apoyo social con que cuenta el gobierno.

Socialmente hablando, la base popular que sostiene a la V República no tiene una estructura definida. Las aglomeraciones urbanas heteróclitas, la informalidad económica y social, los sectores sociales que han pasado a engrosar las capas de la marginalidad en que se ha traducido el empobrecimiento de núcleos importantes de la población venezolana, son el soporte de masas, la fuerza electoral y política del régimen del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Como pequeñas elevaciones en medio de ese estado llano se pueden identificar a individualidades aisladas de los sectores pudientes que llegaron a ocupar posiciones gremiales importantes; a núcleos empresariales que andan tras la pista del apoyo de “arriba” para completar una performance económica exitosa, y a sectores minoritarios del profesorado, de empleados y de estudiantes universitarios que anduvieron siempre orbitando alrededor de las iniciativas políticas más estridentes y descabelladas.

A partir de ese nucleamiento político y social se ha venido ensamblando un aparato militar-policial, se ha procedido al reemplazo del aparato judicial de la democracia de partidos y progresivamente se instala la burocracia de la V República. El control político de Pe-

tróleos de Venezuela (PDVSA) y del Banco Central de Venezuela (BCV), que han perdido su autonomía y se han convertido en instrumentos activos del poder, constituye la base económica del chavismo y completa el cuadro del nuevo “bloque de poder”.

—

3 **Sobre la demagogia y los demagogos**

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la demagogia es la “dominación tiránica de la plebe”, y un demagogo es la “cabeza o caudillo de una facción popular”, o, también, “un orador extremadamente revolucionario”. En la Enciclopedia SALVAT encontramos que “los griegos llamaban demagogo al orador cuya elocuencia arrastraba a los oyentes, o al político que sabía atraerse a su causa al pueblo. En Aristóteles, el término demagogia adquiere un significado peyorativo; demagogos son aquellos líderes populares que transforman la democracia en tiranía, despojando a los ricos y aprovechando las pasiones populares, o en oligarquía, obligando a los hombres ilustres a convertirse en oligarcas para poner fin a la agitación del pueblo”. Y termina señalando que “en la actualidad el término demagogia ha adoptado exclusivamente esta última acepción peyorativa, viniendo a significar la perversión de la concepción y de la práctica democrática que se produce cuando se trata de obtener o mantener el poder político, basándose sobre todo en los instintos materiales y en la capacidad de análisis crítico de las masas populares”.

Hay, pues, un sentido sociológico de los términos demagogia y demagogo representado por la idea que los distintos sectores sociales se hacen de esas expresiones. Y existe un sentido politológico que solo parcialmente puede coincidir con el primero cuando con la expresión demagogo se alude al ofertador político sin sentido de las proporciones, o, como dice Ezequiel Vivas Terán en su *Diccionario de Relaciones Industriales*, a la “forma de dirigir basándose en ofrecimientos que no se tiene intención o posibilidad de cumplir, aparentando estar de un lado, cuando en el fondo se está en otra posición”. Ahora bien, ¿todo político es, por fuerza de las circunstancias o por definición, un demagogo? ¿puede un dictador, ser

un demagogo o sentir la necesidad de serlo? La historia registra casos de demagogos famosos. En Venezuela, Antonio Leocadio Guzman tuvo fama de ser un gran demagogo y sin embargo jamás llegó a alcanzar el poder. José María Velazco Ibarra fue un consumado demagogo que alcanzó cinco veces la Presidencia del Ecuador, presumiendo que para llegar al poder sólo necesitaba tener un balcón desde el cual arengar a las masas. Mussolini, Hitler y Perón fueron dictadores y demagogos que usaron la oratoria teatral y el poder para ganarse la adhesión popular. En cambio Juan Vicente Gómez, Francisco Franco y Augusto Pinochet, en tres épocas distintas, como la mayoría de los dictadores que llegaron al poder por un acto brutal de fuerza o que ejercieron brutalmente el poder, fueron personas que no necesitaron nunca ni el disfraz de la democracia ni de la demagogia. El demagogo nato e incorregible es aquel que habiendo alcanzado el poder no sólo no cesa en sus proposiciones desmedidas sino que parece disfrutar con las manipulaciones que hace de la gente, sobre todo de la más desasistida. Como dice la acepción etimológica, el “orador extremadamente revolucionario” no es, necesariamente, el que está haciendo una revolución sino, las más de las veces, el que se llena la boca con la fraseología revolucionaria y finge conducir a sus seguidores y a menudo al país hacia una meta que termina siendo su propio afán desmedido de poder.

—

4 Sobre los anacronismos políticos

Para la ciencia, por sus propios principios inmanentes, no existe nada que no tenga una explicación racional. Hay espacios del conocimiento insuficientemente desarrollados. Zonas del mundo natural, sobrenatural o social en la penumbra, hasta donde no ha llegado todavía la luz de la razón. De no aceptar esta hipótesis tendríamos que convenir en que, al menos dentro del campo de lo social, muchas cosas andan revueltas en el mundo, envueltas en la cápsula de lo absurdo. Es que cuando se observa al planeta tierra desde la perspectiva que ofrece la plataforma del siglo XXI, hay eventos sociales y políticos en diversas partes del globo que no tendrían explicación si el hombre no hubiese inventado los anacronismos como

forma y método para denominar a esos fenómenos. Tengamos presente que para el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, un anacronismo es un “error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió, y por extensión, incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde”.

Un anacronismo es, por ejemplo, que en la actualidad sobreviva un estado teocrático como el que desde hace varios años se ha establecido en Irán bajo la guía del fundamentalismo islámico administrado por los ayatholas persas. Un pasmoso anacronismo lo encontramos hasta no hace mucho en el hecho de que pudiera existir sobre la Tierra, más allá del atraso y del aislamiento de Afganistán, un gobierno como el de los talibanes que, entre otros propósitos, considera como sus prioridades hacer de la mujer poco menos que un objeto que no puede salir de su casa, que no puede dejarse ver el rostro y que no debe educarse. Es un anacronismo que todavía hoy, en la antigua Palestina, los hombres no hayan podido encontrar una salida al milenarismo conflicto que desangra a dos pueblos que están apelando todavía a las formas más primitivas de matarse ante la falta de un acuerdo para convivir en el espacio que la historia les ha señalado como propio a judíos y palestinos. Se trata de un anacronismo que en la culta y moderna Europa, los católicos y los protestantes irlandeses prolonguen hasta el absurdo su enfrentamiento por el futuro de un estado en el que irremisiblemente tendrán que convivir. Es un anacronismo que el mundo haya tenido que presenciar en la antigua Yugoslavia una guerra entre sus habitantes motivada por la limpieza étnica y religiosa.

En la misma línea de pensamiento tenemos que concluir en que la única forma de poder comprender buena parte del discurso, de las argumentaciones, actitudes, confrontaciones y desplantes del teniente coronel Hugo Chávez Frías es si lo consideramos como la expresión de un anacronismo. No se puede calificar de otro modo al empeño de inventar para Venezuela, y en el tercer milenio de la era cristiana, una ideología basada en palabras y en hechos acaecidos entre los siglos XVIII y XIX. El “árbol de las tres raíces”, cultivado a partir del protagonismo en su tiempo de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, es, por decir lo menos, una in-

genuidad atemporal inefable. Y pretender, en el comienzo de los años dos mil, la edificación de un estado socialista así sea a partir de las correcciones de lo que fue o sigue siendo la experiencia histórica del socialismo real, después del fracaso de la Unión Soviética, del derrumbamiento del Muro de Berlín, de los cambios en todos los antiguos países socialistas de la Europa del Este o de la manera como el liderazgo chino está conduciendo en la actualidad a su país, representa un anacronismo político difícil de calificar.

—

5 **Sobre el temor como método de gobernabilidad**

Entre los muchos sentimientos que influyen, y a veces gobiernan, las relaciones entre los hombres y las de estos con el resto de la sociedad y con el Estado, están el respeto y el temor. La naturaleza política de un régimen puede determinarse a partir de la identificación, entre el respeto y el temor, del sentimiento que domine la actitud de los ciudadanos frente a quienes administran. Cuando el respeto prevalece, existe un reconocimiento a los derechos, a la dignidad y al decoro de las personas, unido a la disposición espontánea de abstenerse de ejecutar cualquier acto, palabra o gesto que pueda considerarse ofensivo. Respetar es admirar, honrar, enaltecer. En cambio, cuando domina el temor se genera miedo junto con sentimientos de inquietud y de incertidumbre. Por cierto, el temor a los hombres, a los jefes y al poder es muy distinto del temor a Dios. En aquel no hay nada reverencial ni respetuoso, sino, por el contrario, alarma, recelo y desconfianza. En las democracias, por ejemplo, gobierna el sentimiento de respeto y mientras más consolidado y maduro sea este sistema político es mayor la actitud de respeto hacia las instituciones, hacia las leyes, hacia el estado de derecho.

En una democracia verdadera no hay lugar para el temor. Pensar, hablar y actuar por parte de los ciudadanos, no tiene más límites que el propio nivel de sus conciencias y la legalidad existente, pero una legalidad frente a la cual no existen aprensiones por las manipulaciones de que esta pueda ser objeto. Las dictaduras, por el contrario, son el reino del temor. El ejercicio del poder al margen del de-

recho, ensancha el campo de la arbitrariedad. El poder, entonces, amedrenta y si su acción se rodea de un velo de misterio y de inaccesibilidad, son mucho mayores las dudas, las sospechas y el pánico que se suscita entre la gente.

Desde el punto de vista que nos ha llevado a este enfoque, puede afirmarse que, desde hace por lo menos cuatro años, Venezuela ha venido deslizándose hacia el establecimiento de un régimen de temor. Aun tratándose el chavismo de un gobierno en el cual el origen de los mandatos y el desempeño de los poderes públicos tienen lugar dentro de las formalidades democráticas, lo cierto es que ha hecho del temor (del funcionario público alto y bajo en primer lugar y, luego, de capas crecientes de la población) el anclaje principal de su acción administrativa. La agresividad sin límites proveniente de la majestad presidencial; las amenazas veladas y abiertas del mandatario nacional (contra los ricos, los terratenientes, algunos banqueros y ciertas categorías de empresarios, contra los políticos de la llamada cuarta República, contra los medios de comunicación y contra la jerarquía de la Iglesia Católica); las formas usadas para llevar adelante y tratar de imponer la nueva legalidad (las famosas cuarenta leyes); el estilo militar de la administración; la conversión progresiva de la DISIP en un poderoso aparato de inteligencia y de intervención en la privacidad de los ciudadanos (control de las comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas, etc.); la estigmatización de individualidades y de grupos importantes de venezolanos mediante una violencia verbal ajena a la tradición democrática de quienes han ejercido el poder, y la toma protegida por el Estado de plazas, espacios, instituciones y lugares públicos o de oficinas de empresas privadas, por parte de hordas fanatizadas, son todos mecanismos que han terminado por atemorizar a los ciudadanos.

—

6 Sobre el poder como finalidad

Es una vieja discusión no zanjada todavía la cuestión de si el poder es un medio o un fin. La filosofía política y la ética figuran como los grandes arsenales de argumentos de donde se abastecen los que se colocan en una o en otra posición. No obstante, más allá

o más acá de la cuestión teórica está la realidad. El poder y los atributos que lo rodean ejercen un atractivo tan poderoso para los hombres que casi sin mayores esfuerzos de la razón se convierten en finalidades autónomas. Obviamente, el espacio para que el poder se mantenga como un instrumento al servicio de los ciudadanos o tenga límites tan indefinidos que lo hagan fácilmente pasto de las ambiciones personales y de las desviaciones más vituperables, depende de que las leyes se hayan convertido de verdad en la dictadura de los hombres y de que estos hayan sido educados en el respeto de la legalidad. Ahora bien, quien ejerce el poder, salvo si se trata de un monarca absoluto que no tiene que dar ninguna explicación acerca de la función que desempeña en cumplimiento de un mandato colocado por encima de la voluntad de los hombres, actuará siempre movido por la conveniencia de demostrar que lo que hace es en función de intereses superiores.

Fuera de los monarcas nadie se hace del poder por un capricho personal o por una obligación hereditaria. El ambiente social que rodea, que precede y que sucede el ejercicio del poder termina por ofrecer explicaciones y justificaciones para apropiarse del gobierno de una sociedad y permanecer por tiempo indeterminado al frente del mismo. Existen ciertas pistas inconfundibles que permiten identificar, sin graves riesgos de incurrir en equivocaciones, las situaciones en las que el poder se convierte en una finalidad en sí mismo. Cuando no existe un proyecto político compartido, fruto de una elaboración colectiva, así se hable de ese proyecto hasta el cansancio; cuando no existe un partido político organizado previamente a la toma del poder que actúe como elemento precursor de ese propósito, cuando no hay un programa ni una ideología precedentes, el acto de alcanzar el poder y de conservarlo se convierte en un fin autónomo.

Pues bien, cada día que pasa, el ejercicio del poder para el actual Presidente de la República pareciera convertirse en una finalidad en sí mismo. Cuando el teniente coronel Chávez Frías asumió la Presidencia después de las elecciones de 1998, se apresuró a anunciar que la salud del “proyecto”, la posibilidad efectiva de su realización (aunque nadie sabía de lo que se trataba), pasaba por dedicar cuando menos un año a la acción política. El año de la política sería 1999. A partir de ese momento comenzó una verdadera cruzada por

el copamiento de los poderes públicos nacionales, estatales y municipales. Paralelamente se procedió, sin solución de continuidad, a tratar de proveer al poder de una base social menos volátil que la ofrecida por los sectores que rubricaron el triunfo electoral del 98. Y así hemos llegado hasta el punto de que, como le gustaba decir al general Augusto Pinochet, ni una hoja se mueve en el horizonte venezolano sin que el Presidente de la República lo sepa o dé su consentimiento.

Pues bien, hechos estos sumarísimos comentarios preliminares que pueden permitirnos arrojar alguna luz sobre lo que vendrá, podemos pasar a intentar la caracterización política del régimen del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Digamos, de una vez, que hemos encontrado en la naturaleza política del chavismo ocho caracteres. La percepción que tenemos de su descripción es que esos caracteres no se presentan conforme a un orden jerárquico y ni siquiera de acuerdo a una cronología. Ellos están presentes en el fenómeno político examinado y, de acuerdo a la dinámica de los hechos, al contexto general o particular dentro del cual esos hechos se producen, unos rasgos pasan a ser o dejan de ser dominantes. Lo que sí nos parece concluyente es que la comprensión del chavismo debe hacerse a partir de la combinación de todos ellos.

I. EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO

Para un movimiento político, en ejercicio del poder, que tiene, como decíamos en la introducción a esta segunda parte, dos partidas de nacimiento, no resulta obvio identificar su carácter democrático. Este es el caso del Movimiento Bolivariano. No obstante, antes de ser electo, en 1998, Presidente de la República, pero una vez escogida la vía electoral como forma de acceder al gobierno, a pesar de sus antecedentes de conspirador y de golpista, o seguramente por causa de esas circunstancias, el teniente coronel Hugo Chávez Frías insistía en sus convicciones democráticas. Partiendo de una crítica feroz y acrimoniosa contra la democracia representativa y partidista que caracterizó la vida política del país desde 1958 hasta 1998, repetía sin fatiga que la democracia encarnada por su régimen sería social, participativa, humanista, pacífica, revolucionaria y protagónica. Tal vez por desconfianza en la reiteración de los términos con los que calificaba y continúa calificando su concepción de la democracia, a muchos venezolanos y a no pocos analistas y políticos del mundo exterior les ha costado verificar en la práctica las manifestaciones concretas del nuevo modelo de democracia que se le propuso al país. ¿Por qué cuesta entender y asimilar el concepto y la realidad de la democracia en la que creen Chávez y sus seguidores? Podemos decir, de

primera intención, que por dos razones elementales. Antes que nada, porque las primeras expresiones del “nuevo poder” se produjeron en el marco legal de la vieja y execrada democracia, ayudadas por las manos de hábiles cirujanos del derecho cuyas conclusiones fueron respetadas por todos los demócratas de Venezuela. La segunda, porque las expresiones del “nuevo poder” generadas a raíz de haberse reunido la Asamblea Constituyente y promulgada la Constitución de la República Bolivariana, ofrecen demasiadas dudas sobre la plena vigencia del estado de derecho que debería corresponder a una democracia.

El reconocido historiador Manuel Caballero llegó a comentar que, en 1998, los venezolanos habíamos votado por una dictadura. No era un juicio de valor sobre las convicciones del nuevo Presidente recién electo, el militar y teniente coronel Hugo Chávez Frías, sino sobre la naturaleza del proceso político que tenía lugar en Venezuela y que, a juicio del distinguido intelectual, se expresaba de una determinada manera en la coyuntura electoral de aquel año. En más de una oportunidad, en nuestros comentarios verbales o escritos, destacamos la honestidad intelectual de Chávez al reconocer que él no era la causa de lo que estaba pasando en Venezuela sino, tal vez, su principal consecuencia. No debería ser subestimado, ni por Chávez ni por la oposición a su régimen el hecho de que la forma que adoptó el tránsito hacia el proceso de cambios que había madurado en nuestra sociedad fue la apelación del electorado a los desprestigiados procedimientos democráticos.

En el momento menos esperado, una de esas coyunturas que preparan inadvertidamente las tendencias subterráneas de la dinámica social, puede aflorar como una contradicción insuperable para Chávez el hecho de haber recibido el poder de un proceso democrático normal y de haberlo concentrado luego hasta su más elevada expresión, convertido más adelante en una revolución y más recientemente en el camino hacia un socialismo de nuevo tipo. Es posible que el electorado nacional haya votado, en 1998, por una “dictadura”, es decir, por orden, por adecentamiento del país, por progreso económico material para cada venezolano, pero, con toda seguridad que no votó por una revolución y muchísimo menos por el socialismo.

El carácter democrático de un régimen es algo que se obje-

tiva en la experiencia histórica concreta de un pueblo. Puede aparecer y desaparecer o mantenerse según las condiciones de tiempo y de lugar. El carácter democrático de un estado no depende de las convicciones democráticas de quien lo dirija y ni siquiera del origen democrático que haya tenido el sistema político, aun cuando es obvio que esos factores cuentan, y a veces determinadamente. Los mandatos iniciales de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia, en la Europa de entreguerras, tuvieron un inobjetable origen democrático y, sin embargo, luego encarnaron las dos formas de gobierno más antidemocráticas que conoció el mundo en el siglo XX: el nazismo y el fascismo. Oliverio Cromwell abrió el camino de la República en Inglaterra al levantarse contra el despotismo representado por Carlos I en el siglo XVII. A tal punto llevó la fiereza de sus convicciones antimonárquicas que hizo decapitar al Rey pero luego ejerció dictatorialmente su poder. La peculiar democracia mexicana nació de en medio de una larga guerra civil y de una sucesión interminable de caudillos que terminaban sus mandatos porque eran fusilados o asesinados. La democracia popular venezolana surgió del movimiento armado cívico-militar del 18 de octubre de 1945 contra un gobierno democrático concebido en los términos conservadores de la legalidad post-gomecista. Ahora bien, resulta innegable que un gobierno democrático se define, conjuntamente, por su origen y por sus ejecutorias. Las ejecutorias democráticas pueden legitimar el origen de fuerza de un gobierno y las ejecutorias antidemocráticas pueden deslegitimar el origen democrático de un régimen.

En el análisis del caso específico de la Venezuela de este tiempo hay que proceder, para tener un punto sólido de referencia, como aconsejaba Nicolás Bujarin a los comunistas rusos de principios del siglo XX (Cf. *La Economía Política del Rentista*, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente N° 57, 1974). Decía Bujarin que a la hora de someter a la crítica los escritos y las ejecutorias de los enemigos de la revolución, era importante identificar y tener en cuenta el método que ellos empleaban en sus análisis y en sus actuaciones, así como su origen social, la clase de la cual provenían, sobre todo si era una clase enfrentada a los intereses de la revolución, pero que, en todo caso, eso no bastaba, que había que ir siempre al fondo de las cosas. Claro que es significativo, en el caso del tenien-

te coronel Hugo Chávez Frías, la educación militar que recibió; la formación castrense seguramente inspirada en principios no democráticos; la actividad conspirativa que adelantó, por espacio de diez años entre 1982 y 1992 a la sombra del sistema democrático, y el intento de golpe de estado contra un gobierno constitucional elegido, conforme a las reglas de la democracia, por el pueblo. Puede sostenerse que después de estos hechos, Chávez llega a participar en un torneo electoral de la vieja democracia a regañadientes y después de haber ensayado, oportunistamente, el recurso de la abstención electoral (que ya para la década del noventa del siglo pasado era el hecho electoral dominante en el país), lo cual pudiera indicar que eran falsas de toda falsedad sus protestas democráticas a partir de 1998. Es posible, incluso, sustentar la hipótesis de que el teniente coronel Hugo Chávez Frías utilizó el juego democrático como táctica y estrategia para alcanzar los objetivos que junto con los compañeros de logia se trazaron desde 1982. Con todo y eso, en el régimen presidido por Chávez, en seis años de gobierno cumplidos, debemos ser capaces de reconocer, entre sus múltiples caracteres, el rasgo democrático. ¿Cómo explicarlo?

El acceso de Chávez al poder y su permanencia en él se producen en un contexto democrático que ni siquiera las más cerriles y montaraces convicciones antidemocráticas podrían desconocer. El origen del poder de Chávez no tiene lugar en medio de una asonada militar ni de una insurrección popular, sino conforme a las reglas claras de la democracia universal. Ni siquiera la legalidad que el Gobierno Bolivariano se ha dado con posterioridad a 1999 ha cambiado un ápice los principios electorales básicos dominantes en el país desde 1945. Este origen, aun cuando pueda ser desconocido o ignorado, crea un constreñimiento no sólo de naturaleza constitucional, sino social, ético y político que, dadas ciertas condiciones, no se pueden violentar. Más importante todavía, la conquista del poder total por parte del teniente coronel Hugo Chávez Frías (es decir, su propia Constitución, sus propias leyes, el control de los demás poderes públicos nacionales, estatales y municipales) se ha producido mediante la aplicación de los procedimientos democráticos establecidos, a pesar de los cuestionamientos que diversas fuentes le han formulado a estos últimos. El pueblo venezolano, durante cincuenta años,

ha recibido una educación democrática que ha formado en el ánimo de cada ciudadano ciertos valores cívicos y unos hábitos políticos que, a pesar de los triunfos de Chávez, se han consolidado: votar periódicamente, elegir gobernantes, escoger representantes, etc.

Desde otro punto de vista, el entorno internacional impone unos usos democráticos obligantes para los países civilizados. En el caso de la América Latina, vivimos un tiempo que ha hecho retroceder los modos de la fuerza que durante un buen trecho de nuestra historia caracterizaron la vida política de todos los países del continente. Seguramente permanecen adormecidas muchas de esas fuerzas atávicas o metidas en cintura por una institucionalidad supranacional. La posibilidad de que la fuerza reaparezca no ha muerto pero este no parece ser su tiempo. El apoyo que durante largos períodos del siglo XX recibieron los regímenes de fuerza por parte de la primera potencia mundial ha sido substituido por una política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica que privilegia el establecimiento y el funcionamiento de regímenes democráticos. Esta nueva visión de la política continental ha sido recogida en los comienzos de este siglo XXI por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Carta Democrática, documento por perfeccionar, que no ha sido aplicado hasta ahora pero que ya ha sido invocado y que representa, con todo y la crisis de la OEA, un peso moral para los gobiernos del continente americano. La consolidación y renovación de la democracia europea alrededor del portentoso éxito político que representa haber hecho de la vieja y decrepita Europa de antes de la segunda guerra mundial el cuasi-Estado federado vigoroso de hoy, constituye una referencia obligante para los gobernantes del siglo XXI. Se trata de 25 estados, aproximadamente 250 regiones y 450 millones de habitantes que después de haber firmado la Constitución Europea en el 2004 escogieron los principios democráticos para regir sus vidas. Si a este último hecho agregamos el derrumbamiento del socialismo real en la antigua Unión Soviética y en los países de la Europa del Este que caminan en el presente a marcha forzada hacia el perfeccionamiento de nuevas democracias, este factor constituye un muro de contención contra las fuerzas antidemocráticas que no puede ser ignorado ni evitado por países como Venezuela.

Todo este conjunto de factores ha permitido que, al mismo

tiempo que se consolidan otros caracteres del chavismo, se mantengan unas formalidades democráticas, a veces en condiciones muy precarias, pero que sobreviven. La apelación constante por parte del Presidente de la República a la Constitución y a las normas constitucionales, el mantenimiento de los mecanismos electorales como canal de expresión de la voluntad colectiva, la existencia de medios de comunicación en los que todavía es posible encontrar manifestaciones de la disidencia, son expresiones de una realidad que trasciende a las intenciones de los hombres. Por supuesto, nada de esto impide que el juego democrático manipulado por espíritus inescrupulosos conduzca a resultados que, en nombre de la democracia terminan negándola, como por ejemplo, establecer por la vía de los hechos la dictadura de las mayorías para silenciar a la disidencia, impedir el control administrativo del sector público, aniquilar en la práctica la autonomía de los poderes públicos sometidos al Poder Ejecutivo, o emplear la legalidad y el aparato de la legalidad para perseguir, atemorizar y someter. La democracia es el gobierno de las mayorías pero no la dictadura de las mayorías y mucho menos cuando el carácter mayoritario se establece a partir de un proceso electoral que aun siendo formalmente válido no expresa estadísticamente la voluntad mayoritaria de la población sino la de los electores que acudieron a votar. Es el mantenimiento y el respeto de la pluralidad de pareceres lo que le da legitimidad al formalismo electoral que le reconoce el triunfo a la primera minoría del país.

II. EL CARÁCTER MILITARISTA

Los caminos y vericuetos por los que anda y desanda la historia son verdaderamente insondables. ¿Quién podía imaginarse en Venezuela, hace siete años, la vía por la que el país iba a llegar otra vez a un gobierno militar? Ya sabemos que más de un analista ha subrayado la posible influencia del señor Norberto Ceresole en el desenlace de la situación política nacional que estamos presenciando. Y no pocos críticos han creído ver en la militarización, así haya sido transitoria, de porciones de la función pública, el inquietante signo de la tendencia que se abrió paso el 4 de febrero de 1992. Las cosas son, sin embargo y al mismo tiempo, tan simples y tan complejas que las explicaciones ensayadas no alcanzan a precisar con el rigor debido la racionalidad del proceso que tiene lugar en Venezuela. Es altamente probable que para quien, como el teniente coronel Hugo Chávez Frías, conspiró durante diez años en el seno de las fuerzas armadas y entre militares, al llegar al poder, independientemente de la vía escogida, pensara en los militares para formar su gobierno. Del mismo modo, es perfectamente posible suponer que alguien formado en el ambiente militar y perdido en la selva civil que no conocía, haya apelado a sus camaradas de armas para hacerle frente a la misión que el electorado le había confiado. Sin embargo, la determinación de ha-

cer, desde el vamos, de la institución militar el eje de la nueva administración obedece, en el fondo, al estado de inhibición en el que ha entrado la sociedad civil venezolana. Esa ha sido la más clara demostración del pernicioso efecto que el estado de anomia ha provocado entre los venezolanos, situación que puede prolongarse mediante manipulaciones como la demagogia, el populismo y el paternalismo.

El orgullo institucional de los militares ha sido sin duda sensibilizado por las tareas de las que muchos de sus miembros están siendo responsabilizados. Esa ocupación de espacios por el mundo castrense se ha facilitado, en el fondo, porque la sociedad civil, mediante procedimientos en un principio incuestionablemente democráticos, resolvió renunciar al predominio civil de la administración de la República. Ahora bien, lo que nadie puede negar es que los cuarteles, por su naturaleza, no son y no pueden ser escuelas de democracia. Los militares tienen la altísima misión de preservar la democracia no de practicarla. No obstante, las tendencias sociales más diversas han terminado reuniendo sus aguas en el gran río del militarismo.

El militarismo es una concepción del gobierno y una práctica administrativa que hace de la institución armada o de algunos connotados representantes de ella el centro de la actividad política de una sociedad organizada. La base del militarismo es la idea de que frente a situaciones de crisis (social, económica o política) o para la conquista de grandes objetivos nacionales, es necesario apelar al orden y a la disciplina propios de la cultura militar. La idea prende, al principio, entre componentes de las fuerzas armadas y, en no pocas coyunturas, se expande luego hasta cubrir otros ámbitos de la vida social. Cuando la convicción de la superioridad del orden y de la disciplina militares o de su necesidad en determinadas situaciones se circunscribe al ámbito estrictamente castrense, se dan las condiciones subjetivas para que se produzcan las asonadas militares, los golpes de estado y cualquiera de las otras formas de irrupción violenta de los hombres de armas sobre el poder. Cuando esa misma convicción permea a la institución militar y se proyecta y progresa fuera de ella, en el campo de la sociedad civil, el militarismo puede presentarse entonces como arraigado popularmente. Se dan, de ese modo, las condiciones objetivas para que el fenómeno vista un ropaje de le-

gitimidad que, en su esencia y naturaleza, no tiene.

El militarismo no es la militarización de la sociedad o de algunas áreas de su funcionamiento. Una sociedad, un estado o una institución se militarizan cuando, como dicen los diccionarios, se encuentran en una “situación de carácter excepcional establecida mediante decreto por el gobierno de una nación, por lo que determinadas empresas privadas o servicios de carácter público pasan a depender de la jurisdicción militar”. En cambio, estamos en presencia del fenómeno del militarismo cuando hay “preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación”, o cuando se impone y se generaliza el “modo de pensar de quien propugna dicha preponderancia” (DRAE). El militarismo adquiere su más acabada expresión cuando se convierte en un “régimen político en el cual se exalta un aparato específico de estado; éste (la fuerza militar) pasa a primer plano en desmedro de los aparatos políticos, que pierden su función específica y a lo sumo quedan solo como aparatos auxiliares” (Cf. Calello, Hugo, *Poder Militar y Estado Nacional en América Latina*, Caracas, Rocinante, 1977). Para decirlo en términos de Antonio Gramsci, una sociedad o un estado viven una experiencia militarista desde el momento en que el bloque de poder se encuentra hegemonizado por el mundo militar o por quienes actúan en su nombre y representación aun sin haber recibido de manera expresa esa comisión o ese mandato.

Ahora bien, cualquiera sea la explicación, las causas y el contexto del militarismo, en definitiva se trata de una anomalía política y social que arranca de una errónea apreciación del papel del aparato militar de estado en la historia. No hay y no hubo nunca sociedades militares a pesar de la preponderancia alcanzada por jefes militares y por el estamento militar en distintas fases del acontecer histórico. Las sociedades nacen, se forman, se organizan, se estratifican, se gobiernan y funcionan de acuerdo a los patrones económicos, políticos y culturales que ellas mismas se han establecido. Para edificar un estado, alcanzar la independencia de una nación, realizar una revolución o librar una guerra, casi siempre hizo falta contar con un ejército, pero este no fue más que el medio para alcanzar el fin propuesto, nunca fue un fin en sí mismo, y la idea que animó esos acontecimientos siempre partió del mundo civil, vale decir de la pro-

pia sociedad.

El militarismo no es un fenómeno exclusivo de determinadas etapas de la historia ni una particularidad de los países atrasados, pero hay que convenir que en estos últimos, con frecuencia, se han dado mejores condiciones para su desarrollo. Sin embargo, en la civilizada Alemania del siglo pasado, el militarismo prusiano encontró un ambiente óptimo para desarrollarse. En el caso de la América Latina, la historia de nuestros pueblos está plagada de experiencias militaristas, muchas veces auspiciadas, promovidas y sostenidas desde el exterior, principalmente por parte de los gobiernos norteamericanos. Nada de extraño pudiera haber en el hecho de que en este tiempo resurgiera un militarismo autónomo, sin la bendición inicial de los Estados Unidos y aun contra sus deseos. Por cierto, la alternativa del socialismo real no pudo escapar tampoco al surgimiento del militarismo. La creación de las llamadas fuerzas armadas revolucionarias, la integración de los militares al ejercicio pleno de las funciones políticas (votar, ser miembro del partido único, integrar los parlamentos y ser objeto del adoctrinamiento revolucionario, etc.) no pudieron impedir entre los militares comunistas que se produjera el espíritu de cuerpo superior gracias, únicamente, al control de las armas.

El militarismo ha cambiado más de una vez de piel. A veces se ha ocultado detrás del nacionalismo, doctrina que siempre ha contado con poderosos adeptos en el seno de las fuerzas armadas. Lo peor de todo, sin embargo, y lo más peligroso, la forma más perversa del militarismo se da cuando en medio de una confusión generalizada y bajo la apariencia de la más genuina expresión democrática, se consagra constitucionalmente la preponderancia de la institución militar, de su espíritu y de su cultura, y se la proyecta, explícita o implícitamente, como el ejemplo a seguir por el resto de la sociedad. Hay gente que opina que los pueblos están condenados a sufrir las consecuencias de sus propias imprevisiones, de sus deficiencias y de sus desviaciones. Y hay quienes en medio de un desvarío mental llegan a explicar, como quien cae en el pecado y se redime reencontrando el buen camino, que el militarismo es el justo castigo que ciertas colectividades deben sobrellevar antes de encontrar la senda del saneamiento de la sociedad civil y de la revitalización de

las instituciones. A los que ingenuamente piensan de esa manera hay que recordarles que los regímenes autoritarios militaristas se sabe cuándo comienzan pero no cuándo terminan.

En el caso de Venezuela y en la oportunidad de ser sancionada la vigente Constitución de la República, fue expresa la voluntad del Jefe del Poder Ejecutivo, teniente coronel Hugo Chávez Frías, y de los constituyentes, de establecer un fuero militar privilegiado. No pueden quedar dudas sobre la superioridad que Chávez y sus seguidores más cercanos le han asignado a la institución militar frente al conjunto de la sociedad civil. No es solo el papel y el lugar asignado a integrantes del mundo militar en la administración del Estado. La referencia permanente a la gesta militar bolivariana y a las acciones militares del largo período del caudillismo y de las montoneras, indican una clara desviación militarista. Con la sola excepción de la misión Robinson (pues hubiera resultado una audacia haber puesto un programa de alfabetización bajo la advocación de una figura militar), hasta ahora ningún civil ha recibido en la hagiografía chavista el honor de denominar algunas de las misiones o planes creados por el jefe del bolivarianismo. El propio término “misión” tiene una connotación militar y los nombres escogidos para distinguirlas (Bolívar, Sucre, Rivas, Vuelvan Caras, Maisanta, Zamora) así como las denominaciones de las estructuras políticas y electorales organizadas sobre la marcha (comando táctico, dirección estratégica, unidad de batalla, patrulleros, lanceros, etc.) no ocultan, ya no una asociación, sino el tutelaje militar sobre el conjunto de la sociedad.

III. EL CARÁCTER REVOLUCIONARIO

A partir del momento en que el teniente coronel Hugo Chávez Frías, electo ya Presidente de la República, comenzó a hablar de “revolución” para calificar el gobierno que encarnaría, se inició entre periodistas, politólogos, sociólogos y analistas de la situación nacional una discusión, aún no concluida, acerca de la racionalidad y pertinencia de tal calificación. En la oportunidad de una entrevista televisada, recordamos haber oído de labios de un veterano comunicador y luchador social, simpatizante discreto del chavismo y, para el momento de escribir estos comentarios, director de un importante diario capitalino, la afirmación de que la de Chávez podía considerarse una revolución pero no en el sentido marxista del término sino en los más convencionales de la tradición política latinoamericana. Y hemos leído una buena cantidad de comentarios publicados en diferentes órganos de la prensa nacional, calzados con la firma de distinguidos intelectuales de clara filiación anti-marxista, en los que se ha insistido que la “Bolivariana” es una verdadera revolución de inspiración marxista. En este último caso, debemos subrayarlo con objetividad, a pesar de la respetabilidad de los razonamientos, en el fondo de las encendidas argumentaciones pareciera subyacer el interés de descubrirle una dependencia ideológica vulnerable al gobierno chavista en lugar de la necesidad de identificar correctamen-

te la verdadera naturaleza del proceso político venezolano.

Nosotros mismos, en la época en que manteníamos una columna semanal en varios periódicos del país, mucho antes de que Chávez alcanzara el poder, nos referimos al interesante proceso que César Gaviria Trujillo llevaba adelante desde la Presidencia de Colombia como “la revolución colombiana”, con la intención de puntualizar el hecho de que, sin llamarse así, lo que estaba ocurriendo entonces en la hermana República era mucho más revolución que centenares de movimientos que en la misma Colombia y en otros países latinoamericanos se habían denominado de esa manera. Y si a ver vamos el caso de Venezuela, dejando a un lado la Guerra de Independencia o Revolución Emancipadora como también se la llama y la Guerra Federal o Revolución Federal que fue el desenlace, veinticinco años después de la primera, de muchos de los problemas que la Revolución de Independencia dejó sin resolver, a todas las demás “revoluciones” que se dieron en el país les quedaba ancho el nombre. No es que estas dos lo hayan sido plenamente sino que por su duración, por los traumas que causaron y por las consecuencias que provocaron, se acercan mucho más que todas las restantes a la idea de una “revolución”. En todo caso, en nuestro país se puede hacer un verdadero muestrario de “revoluciones”. Apenas cinco años después de haberse consolidado el nacimiento de Venezuela como estado separado de Colombia, estalló la “Revolución de las Reformas” con la que los antiguos libertadores pretendieron obtener haberes materiales y reconocimientos espirituales a los que se creían con derecho por su consagración a la gesta independentista. Diez años después de este movimiento tuvo lugar una serie de levantamientos populares con un gran contenido social que pudieron haber sido, en otras condiciones, el embrión de lo que solo nominalmente se denominó la “Revolución Popular”. En 1858, con la “Revolución de Marzo”, Julián Castro se alzó contra los Monagas antes de sobrevenir el sacudimiento de la Guerra Federal. Con posterioridad a esta última, en 1867, vino la Revolución Azul que derrocó al Presidente Juan Crisóstomo Falcón. Se oyó hablar, en ese mismo año, de la Revolución Genuina comandada por el General Luciano Mendoza. En 1870 se produjo la Revolución de Abril o Liberal encabezada por Guzmán Blanco contra los Azules. Apenas cuatro años más tarde las tierras del

hoy llamado Estado Falcón fueron escenario de “La Colina” o Revolución de Coro jefaturada por León Colina contra el gobierno de Guzmán. Luego, en 1878, se produjo la Revolución Reivindicadora para devolver el poder a Guzmán Blanco. En 1892 Joaquín Crespo comandó la Revolución Legalista contra el Presidente Raimundo Andueza Palacio. En 1898 tuvo lugar la frustrada Revolución de Queipa con la que el Mocho Hernández pretendía reivindicar el escamoteo electoral del que había sido objeto. Y finalmente, terminando el siglo XIX, la “Revolución Liberal Restauradora” comandada por Cipriano Castro, llevó a los andinos al poder hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, a comienzos de la centuria pasada se produjo la fracasada “Revolución Libertadora” comandada por el General Manuel Antonio Matos contra el gobierno de “El Cabito”. Desde entonces, los venezolanos hubimos de esperar hasta 1945 para que tuviera lugar la Revolución de Octubre y más recientemente, hasta 1999... o 1992... por la Revolución Bolivariana. Del proceso político que encabeza el teniente coronel Hugo Chávez Frías pudiera decirse, después de seis años de iniciado, que se trata de una “revolución nominalista”, que se ha empeñado, más que en crear nuevas instituciones en cambiarle el nombre a las viejas instituciones, sin embargo, faltaríamos a la verdad histórica si no reconociéramos que, con lo que ha hecho es más “Revolución” que la mayoría de las que acabamos de mencionar. Pero hay que ir más al fondo en el examen de este asunto.

Una de las primeras dificultades encontradas para precisar los conceptos estuvo representada por el hecho de que la tradición revolucionaria ha asociado el “acto revolucionario” a la violencia, generalmente armada, como elemento precursor del proceso. De acuerdo con esa tradición, una revolución tipo es un proceso de cambio profundo, con una dosis inevitable de violencia previa, a la que es sometida durante un período indeterminado, la vida política, económica y social de un estado. En el sentido marxista de la expresión, una “revolución es un proceso generalmente violento por medio del cual una clase social (o un bloque de clases) toma el poder político, derrota a la clase (o alianza de clases) que controlaba hasta ese momento al estado e instaura un sistema de gobierno que abre cauce a las nuevas fuerzas productivas y que inicia la transformación de las instituciones jurídicas, políticas, religiosas, etc. y de las formas ideo-

lógicas que le corresponden” (Cf. Bartra, Róger: *Breve diccionario de Sociología Marxista*, México, Grijalbo, 1973). No es en absoluto intelectualmente arriesgado afirmar que, en Venezuela, en ninguno de los dos sentidos que acabamos de definir se han dado revoluciones. En todo caso, en el tema que nos ocupa, se hizo evidente desde el primer momento que para el teniente coronel Hugo Chávez Frías no llegó a existir nunca un hiato político entre el 4 de febrero de 1992 y el 2 de febrero de 1999, momento en que asumió la Presidencia de la República. De esta manera se asociaba, al menos en el ánimo del líder del proceso, el hecho de la violencia (el 4 de febrero del 92) a una declaratoria de revolución que insistía en apellidarse como democrática y pacífica. El elemento romántico y glorioso de la violencia revolucionaria quedaba de este modo vinculado a la normalidad institucional de haber llegado a la jefatura del estado mediante el ordinario proceso electoral de las democracias.

Ahora bien, para que el asunto no quede reducido a un simple acto de voluntarismo político de un caudillo ¿había en Venezuela una situación revolucionaria a fines del siglo XX? En términos políticos puede considerarse que existe una situación revolucionaria cuando en un momento dado de la evolución de una colectividad se ha producido o está a punto de producirse una profunda ruptura en la continuidad del orden establecido. Pues bien, aun en medio de vaivenes y a pesar de la prolongada crisis económica que padecía el país desde fines de los años 70 y que se proyecta hasta nuestros días, podía decirse que Venezuela vivía desde el 18 de octubre de 1945, con la excepción del interregno dictatorial de Pérez Jiménez, un orden político, económico y social de conformidad a un patrón determinado de democracia, pero todo indicaba que al cerrar el siglo XX ese patrón político llegaba a su fin.

Para confirmar lo que ya hoy ha dejado de ser una hipótesis bastaría con registrar las siguientes circunstancias: 1) La ruptura que tuvo lugar en Venezuela, en las elecciones de 1998, encerraba un incuestionable contenido social, se produjo con la participación del pueblo que de manera inequívoca expresó su voluntad de poner punto final a la democracia de partidos; 2) la ruptura fue radical, comportó un deslinde profundo de discursos políticos, de estilos de actuación en la política y de actores en el primer plano de la escena

nacional; 3) la ruptura fue consciente, se trató de una insurgencia contra el orden dominante asumida de conformidad con criterios racionales, en un principio por algunos núcleos de la sociedad y, después del 6 de diciembre de 1998 por la mayoría de los habitantes del país; 4) la ruptura comportó una dosis de violencia frente al estatus aun cuando no llega a adquirir el carácter catastrófico de una insurrección popular o de una guerra.

A la altura de los tiempos en que nos encontramos una situación revolucionaria no se configura, necesariamente, de la misma manera como ocurrió con frecuencia en el pasado. Acontecimientos como el colapso del socialismo soviético, el derrumbamiento del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, el experimento en China de la naturaleza compatible de “una nación y dos sistemas”, para sólo mencionar algunos casos relevantes, prueban que el campo de las posibilidades de desarrollos políticos imprevistos se ha ensanchado en estas épocas de una manera insospechada. En otro plano del análisis, la transición de la dictadura franquista a la ejemplar democracia española de hoy; la evolución de la revolución nicaragüense hacia un régimen democrático plural y el tránsito de la sangrienta dictadura de Pinochet en Chile así como del militarismo argentino y brasileño hacia sistemas civiles democráticos, son otras muestras de los inefables caminos de la política.

Comparando las proposiciones y las intenciones de hace seis o más años con los resultados, sobre todo sociales, que tenemos a la vista no se puede menos que reafirmar las poderosas dudas en relación con lo que Venezuela puede esperar de la dominación del teniente coronel Hugo Chávez Frías sobre el país. Pero tendríamos que ser ubicados en los rangos del “borbonismo” político venezolano si nos resistiéramos a aceptar que en este entresiglos de nuestra historia se le ha dado la vuelta a una página del acontecer nacional. La profundidad de los cambios que se han producido en el país deslinda, sin la menor duda, dos tiempos históricos de Venezuela. Puede discutirse si Chávez es el último representante de la vieja República o el primero de la nueva, pero no creemos que soporte una discusión sería el hecho objetivo del revolcón que han recibido nuestra sociedad y las principales instituciones que la expresaron en el pasado reciente.

IV. EL CARÁCTER IZQUIERDISTA

En el *potpourri* de caracteres del chavismo hay que decir unas palabras sobre el izquierdismo, no sólo porque el propio teniente coronel Presidente en más de una ocasión ha definido su régimen como de izquierda, sino porque muchas de las ejecutorias de su gobierno de más de seis años se inscriben en el cartabón de los postulados programáticos izquierdistas y porque la orientación política más reciente dada por Chávez a la administración que preside apunta hacia la edificación de un socialismo nuevo del siglo XXI. Los términos “socialismo” y “socialista” han sido asociados siempre al desideratum doctrinario de las fuerzas de izquierda, aun cuando puede citarse y no como una mera curiosidad que la denominación oficial del nazismo hitleriano fue la de Partido Nacional Socialista Alemán, lo cual puede mostrar que un movimiento tan reaccionario y militarista como el que encabezó en Alemania Adolfo Hitler no tuvo inconveniente en llamarse, al principio, socialista.

Las expresiones “izquierda” y “derecha”, empleadas en la tradición politológica para definir y ubicar a los movimientos políticos según lo que propongan como programa de acción pública y según lo que hagan como gobierno una vez alcanzado el poder, perdieron fuerza desde que las organizaciones políticas de todos los pa-

íses, a la usanza y con el ejemplo de las europeas, empezaron a identificarse con rótulos doctrinarios. Comunista, socialista, socialdemócrata, socialcristiano, demócrata-cristiano, liberal, conservador, radical, fueron denominaciones con las que pretendieron escapar los partidos políticos a la aparentemente simplista clasificación de “izquierdas” y “derechas” con que se las reconocía. De todas maneras, seguramente por su simplicidad, estas expresiones continúan superponiéndose o anteponiéndose a los nuevos apellidos políticos y nadie podría negar su utilidad no sólo para “clasificar” a las estructuras partidistas, sino para “calificar” sus propósitos, su discurso y sus actuaciones.

En el plano meramente descriptivo y más general, ser de izquierda es pertenecer a un grupo político partidario del cambio. En la práctica, no obstante, es preciso considerar otros elementos definitorios a pesar de que no todos ellos sean atributos exclusivos de la izquierda, particularmente a partir del momento en que la “derecha” empezó a sentir repugnancia por el uso de esta denominación y decidió barnizarse con posturas y nombres populares. La gente de izquierda, sin duda bajo la influencia del marxismo, se ha calificado casi desde su aparición como anti-imperialista y anti-feudal o anti-latifundista (que es la traducción latinoamericana de este último término) y, por extensión, anti-colonialista, con lo cual buscó marcar distancias sociales y políticas de los grandes centros capitalistas del poder mundial, de la abusiva propiedad de la tierra y el sometimiento personal de los campesinos, y del hecho de la dominación y dependencia de los territorios periféricos por parte de los países colonialistas y neo-colonialistas. Por estas mismas razones, las posiciones de izquierda son abiertas a la solidaridad internacional y refractarias a los nacionalismos, especialmente en sus connotaciones de exclusión económica, social y racial. El hombre y la mujer de izquierda son, en diferentes tonalidades, anti-clericales, antirracistas y pacifistas. Las izquierdas son sensibles a lo social, luchan por la erradicación de la pobreza, la eliminación de la explotación de unos hombres por otros y la liquidación de las discriminaciones por razones de género, de origen social, de religión o de nacionalidad. El ámbito social de las izquierdas, el espacio en el cual actúan con comodidad, es el ambiente de la clase obrera, de las masas depauperadas urbanas, de los

marginados, de la intelectualidad de avanzada, de la juventud estudiantosa, de las clases medias radicalizadas y de los excluidos en general. Y el ámbito político constituye un arcoiris que va, al menos nominalmente, de los comunistas a los movimientos contestatarios modernos (ecologistas, “verdes”, feministas, homosexuales, etc.) pasando por los movimientos socialistas o socialdemócratas, la mayoría de las guerrillas rurales y de los grupos armados urbanos.

Dentro de estos rangos es posible ubicar el discurso político del teniente coronel Hugo Chávez Frías, muchos de los actos legislativos y declaraciones oficiales de su gobierno, así como la representación que dice ejercer del “soberano” y la vindicta que, al menos en el plano declarativo y de las medidas efectistas, ha dicho asumir de los pobres, de los marginados y de los indígenas del país. No obstante, tal y como lo puntualizamos en la introducción a esta segunda parte, en la caracterización del régimen chavista no hay un rasgo inequívoco o dominante para el largo plazo. En el discurso y en las actuaciones del chavismo se mezclan y se confunden el interés personal y el interés político; los intereses de estado y las supuestas o declaradas posiciones ideológicas de su dirigente; las conveniencias nacionales y las internacionales. Por ejemplo, el distanciamiento de los Estados Unidos (donde hay un fuerte ingrediente de resentimiento personal de Chávez hacia George W. Bush) y la aproximación a Francia; la amistad entrañable con Fidel Castro y las buenas relaciones que hubo con Sadam Hussein de Irak o que hay con Mohamed Jatami, presidente del estado teocrático fundamentalista de Irán; las actitudes nacionalistas y el empeño de impulsar una referencia internacional junto con otros países latinoamericanos; la defensa encendida de la soberanía nacional frente a Estados Unidos y la complacencia frente a la intervención abierta del régimen cubano; el apoyo a Chávez de fuerzas de izquierda del país ciertamente atrasadas y por muchas razones calificables de fundamentalistas (partido comunista, tupamaros, carapaicas, FBL) o de oportunistas (MEP, VAMOS, PPT) y el distanciamiento de agrupaciones y personalidades de izquierda (MAS, intelectuales de avanzada), o la tajante identificación de las izquierdas en cualquier parte del mundo con sectores sociales orgánicos y la falta de identificación del chavismo con alguna clase social específica del país. Lo mismo puede decirse de la más reciente declaración presi-

dencial acerca de un ignoto camino venezolano al socialismo.

Desde los ya remotos tiempos en que dejó de ser la iluminación de uno de los conocidos socialistas utópicos, la idea del socialismo siempre estuvo asociada a una organización, a un movimiento, a un partido que la impulsaba y que buscaba su concreción en la realidad. En todos los países en donde el socialismo se implantó como gobierno y como sistema de vida, ese momento fue precedido o seguido por la estructuración de un partido de filiación marxista y, por regla general, de una lucha cruenta de las fuerzas insurgentes contra el estatus. En Venezuela, la proposición de edificar un socialismo nuevo, del siglo XXI, partió de uno de esos soliloquios que el teniente coronel Hugo Chávez Frías suele tener y con el mismo ropaje con el que antes anunció la “revolución bolivariana”, la “refundación de la República” o la “democracia participativa y protagónica”. El mismo Chávez y su práctica política tienen que encargarse después de explicar de lo que se trata. Con posterioridad al anuncio de Chávez en la Cumbre de la Deuda Social realizada en Caracas el 25 de febrero de 2005, reiterada en el programa “Aló Presidente” N° 214 del 27 del mismo mes, los corifeos de la revolución bolivariana han visto la luz verde para hablar de un tema que ni siquiera a los restos del añoso partido comunista se le habría ocurrido y han remitido lo medular de la propuesta a la celebración de un congreso ideológico del chavismo en el año 2007.

La ubicación del socialismo de Chávez dentro del catálogo del socialismo universal ha sido ya intentado por el escritor Manuel Caballero (Cf. “Una teoría: el socialchavismo”, en: *El Universal*, Caracas: 1-8, 08/03/2005), por José Guerra (Cf. “Dictadura del proletariado a la criolla”, en: *Descifrado*, Caracas:4, 03/03/2005), por Luis García Mora (Cf. “Al límite”, en: *El Nacional*, Caracas: A-4, 13/03/2005), por Alonso Moleiro (Cf. “El chavismo busca asesoría internacional para diseñar un programa socialista”, en: *El Nacional*, Caracas: A-8, 13/03/2005) y por algunos otros articulistas y comentaristas del acontecer nacional. A lo más que llegaron fue a establecer unos linderos teóricos dentro de los cuales tendría que ubicarse el “nuevo socialismo”, en el caso de intentarse seriamente su implementación, pues no hay manera de deducirlo de las palabras del Presidente. Mientras ese evento tiene lugar, si es que sucede, la libertad intelectual podría per-

mitirnos avanzar algunas hipótesis. Por ejemplo, que el anuncio del socialismo nuevo pudiera ser la justificación de eventuales nacionalizaciones (teléfonos, electricidad, bancos, tierras, edificaciones urbanas) como demostración de la voluntad de romper con los Estados Unidos y que pudiera ser verdad que tal postura podría llegar hasta el petróleo; o la señal para una revisión o reforma de la Constitución Bolivariana con miras a constitucionalizar el carácter dominante del chavismo para ese momento (militarismo, personalismo, autoritarismo, etc.). Es que el socialismo que nos vaticina Chávez requiere de, por lo menos, dos precisiones que puedan perfilar su desenlace. La ausencia del apoyo de clases sociales específicas al proyecto chavista y el reemplazo de esas clases por vastas capas de la población marginadas, empobrecidas, informalizadas, precisamente desclasadas, convierte a Chávez, sin poder notariado, en el representante autonominado de esos sectores, vale decir, él mismo transformado en clase social, en pueblo o en soberano como le gusta decir o simplemente en el César. Lo otro es que el siglo XX fue el siglo del socialismo real y que al terminar la centuria esa importante experiencia histórica, a la vista de todo el mundo y en la cabeza de los gigantes que comandaron el movimiento socialista universal, se desvaneció como por un acto de prestidigitación en el caso de la Unión Soviética y tomó un rumbo inesperado, exactamente lo contrario de lo que estaba pautado al menos en el dominio de lo económico, en China. ¿Se trata de una manifestación patética del anacronismo político que representa el Presidente Chávez? O, ¿estamos en presencia de otra de esas ocurrencias de madrugada en que la ignorancia le cede el espacio existente a la audacia? En todo caso, la Revolución Bolivariana es el régimen de izquierda que hoy existe en Venezuela.

V. EL CARÁCTER NACIONALISTA

El nacionalismo es uno de los términos más equívocos de la política y de la politología. Puede usarse con diferentes significados de acuerdo a la posición que adopte quien la emplee. Así mismo, puede adquirir diferentes sentidos según el momento histórico vivido en el país que se reclame de nacionalista o que sea acusado de nacionalista. Los diccionarios dicen que el nacionalismo es la “doctrina que sostiene las aspiraciones exclusivamente nacionales”. Y Hans Perth y C. Wright Mills sostienen que el nacionalismo “es un sentimiento específicamente moderno, que une a la masa de la ciudadanía con un orden político, en una aspiración común de defenderse bien en la competencia por el poder con otras naciones, organizando todos los órdenes institucionales en el marco de un estado soberano. El nacionalismo pretende el derecho de una nación a determinar su propio destino, es decir organizarse sin intervención extranjera” (Cf. *Carácter y estructura social*, Buenos Aires, Paidós, 1968, p.196). Francois Mitterand, presidente socialista francés durante catorce años, en la oportunidad de visitar, en 1995, la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y recordando las lecciones que Europa debía aprender de la exacerbación de los nacionalismos, declaraba que “nacionalismo es guerra”... “si no derrotamos a los naciona-

lismos se impondrá de nuevo la ley de la guerra”. En Venezuela, un poco antes, en 1992 (Cf. Alejandro Angulo Fontiveros: Gente sin Patria, *El Universal*, 04/03/2005, p.1-17), a propósito de un crédito que el país había solicitado a España y en relación con declaraciones de una diputada a las Cortes Españolas sobre el patriotismo, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez declaró que “el nacionalismo está *demodé*” a lo cual respondió al día siguiente, el 30 de agosto de 1992, el ex-Presidente Rafael Caldera “el nacionalismo no puede desaparecer” (Cf. Además de este autor: “Posibilidad de un nacionalismo latinoamericano” en: *América Latina, conciencia y Nación*, Caracas, Universidad Simón Bolívar, Equinoccio, 1977).

El nacionalismo está vinculado, antes que nada al concepto de nación, es decir al de un grupo humano consciente de su unidad cultural pero que, además, está ubicado sobre un determinado territorio, lo cual configura la noción de estado. Como los estados nacionales aparecieron en la época moderna, por esa razón el nacionalismo es un fenómeno moderno y como los estados nacionales hicieron su aparición en Europa antes que en cualquier otro continente, el nacionalismo fue, primero, un fenómeno europeo. Se comprenderá ahora seguramente la advertencia que citábamos más atrás del presidente Mitterand pues ciertamente los nacionalismos europeos, en particular el francés y el alemán, estuvieron en la base de muchos de los conflictos bélicos experimentados por el viejo continente en los siglos XVIII, XIX y XX. En un continente tan poblado, tan dividido en estados pequeños y en multitud de regiones, el ingrediente del nacionalismo se convirtió en una fuente de rivalidades y de choques casi inagotable, hasta que la lucidez de unos hombres de estado inventó, a partir de 1950, lo que hoy es la Unión Europea.

El proceso de descolonización que cubrió en el continente americano el siglo XIX y en el africano y el asiático el siglo XX, pasó a ser el origen de multitud de nacionalismos. Estos nacionalismos tuvieron una justificación en el patriotismo que condujo a decenas de pueblos a luchar denodadamente por su independencia. Luego, en la etapa del neocolonialismo y de la nueva dependencia a que los grandes centros del desarrollo económico mundial sometieron a infinidad de pueblos atrasados, el nacionalismo fue también un poderoso acicate en el proceso reivindicatorio de las soberanías naciona-

les mediatizadas.

Pero en muchos de los estados emergentes, el nacionalismo se convirtió, sin solución de continuidad, en la justificación del caudillismo, del militarismo y del autoritarismo que terminó asfixiando las posibilidades del desarrollo democrático en el tercer mundo. La doctrina del nacionalismo fue en nuestros países el componente principal de la organización y justificación de los ejércitos nacionales, institución que ha jugado un rol central en la casi totalidad de los países del mundo subdesarrollado. El aparato militar se justificó en un primer momento, en nuestras naciones, como el brazo armado de la voluntad soberana del pueblo que buscaba la independencia; más adelante se comportó como la expresión de las fuerzas de ocupación de los caudillos que sembraron de dictaduras a los países emergentes.

Durante buena parte del siglo XX encontraron su justificación en la lucha contra el comunismo y al desmoronarse éste en sus centros principales, uno de los problemas que ha surgido es encontrar una nueva justificación para la existencia de las fuerzas armadas, sobre todo en aquellos países que no viven una confrontación bélica como sería el caso de los estados rivales del medio oriente. En la América Latina y en otras latitudes azotadas por el narcotráfico, no ha faltado quien ha visto en ese problema la razón de ser y las tareas para las fuerzas armadas de nuestro tiempo. Pero, en todo caso, la soberanía nacional y la defensa de esa soberanía siempre se ha mantenido como el fundamento doctrinario principal de la existencia de los ejércitos. Y no es infrecuente que detrás de los pregones antiimperialistas y de los encendidos discursos en defensa de la Patria, se oculte el espíritu de un nacionalismo malsano, de los que más de una vez ha servido para legitimar dictaduras y dictadores.

En Venezuela, entre 1994 y 1995, en plena crisis política de la democracia de partidos, sin que muy pocas personas tuvieron interés en indagar de dónde provenía y cómo se formó, cundió la moda, con muy buen éxito comercial para la economía informal, de ostentar la bandera nacional de todas las formas que fuera posible: en los automóviles, en las puertas de las casas, en las oficinas. Como tuvimos oportunidad de comentarlo públicamente en ese entonces en artículo de prensa, y privadamente en la Comisión de Reforma del Estado (COPRE) de la cual éramos integrantes, creíamos ver en esa

manera de florecer el patriotismo unos signos políticos inquietantes. Criticamos sin vacilación a quienes se rindieron ante la candidez infame de creer que la ostentación de la bandera nacional era pura y simplemente el signo de un nacionalismo sano. Hasta que a partir de 1998 nos cansamos de ver los desfiles electorales de gente embanderada, portando por millares el pendón nacional, usando camisas, gorras, chaquetas, etc., con los colores nacionales que de pronto le hicieron creer a una buena parte de la opinión nacional que habían surgido los verdaderos propietarios de los símbolos sagrados de la Patria, lo cual era casi como decir los nuevos propietarios de la Patria. A la cabeza de esos sectores estaban los militares que había insurgido en 1992 y que pasaron a comandar el Estado a partir de 1999. No tenemos ninguna base para sostener que la oleada nacionalista representada por el embanderamiento del país a partir de 1994-1995 haya sido una habilidosa iniciativa política de los sublevados derrotados en 1992, más aún, no lo creemos. La moda del emblema nacional en aquel entonces, era una manifestación de la atmósfera autoritaria que subyacía en el país y que intuitivamente veía en el seno de las fuerzas armadas nacionales la posibilidad de encontrar una salida para el cuello de botella venezolano. La aparente normalidad conseguida por el país después de los alzamientos de 1992 apenas ocultaba la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático, en las instituciones democráticas, en los partidos y en el liderazgo civil. La “ley de la guerra” de la que hablaba Mitterand no llegó a tener en la América Latina y en Venezuela la misma significación que en Europa, pero en más de una oportunidad se manifestó bajo las formas más diversas de dictaduras que no encontraron mejor doctrina que arrojarse en la bandera nacional, en los símbolos patrios y en “las mejores tradiciones nacionales” para justificar los desafueros contra la democracia, contra el estado de derecho y contra los ciudadanos.

Un elemento nada infrecuente que ha alimentado y alimenta el nacionalismo de los países de la América Latina está representado por las formas y los contenidos de las relaciones de estos países con los Estados Unidos. Antes de que se conocieran entre nosotros las tesis de V. I. Lenin sobre el imperialismo, la América Latina ya había sentido la presencia de la Doctrina Monroe y los efectos del

contenido de la teoría del Destino Manifiesto. Establecida correcta o incorrectamente la apreciación, lo cierto es que para vastas capas de la intelectualidad latinoamericana y para la totalidad de los pueblos formados por el mestizaje indígena, negro y español que durante años interminables vieron derrumbarse sueños de vivir en democracia y de conquistar la quimera de la redención social ante las arremetidas brutales de la fuerza, se estableció la idea, como parte del subconsciente colectivo latinoamericano, de que la “mala suerte” de estas naciones, más que el producto de nuestras de nuestras propias insuficiencias y limitaciones, era la consecuencia de la intervención abierta o soterrada de los intereses norteamericanos. Y en el caso específico de Venezuela, la “religión bolivariana”, establecida mucho antes de que el teniente coronel Hugo Chávez Frías alcanzara el poder, se encargó de condimentar entre muchos compatriotas el sustrato espiritual de que en algún momento se darían las condiciones para reivindicar nuestros más preciados valores (independencia, soberanía, dignidad nacional, etc.) frente al poderoso.

El carácter nacionalista del chavismo pareciera ser contradictorio con su izquierdismo, con su internacionalismo y con los elementos democráticos que presenta (y pudiera llegar a estar en abierta contradicción con esos rasgos) pero es absolutamente compatible con el militarismo, el autoritarismo, el populismo y el bonapartismo. En más de una oportunidad, sin embargo, las contradicciones no expresan la imposibilidad de que fenómenos opuestos se manifiesten en un mismo país y en el mismo tiempo histórico, sino que traducen el rasgo principal de un sistema incoherente, formado por elementos heteróclitos y hasta por intereses distintos.

VI. EL CARÁCTER

PATERNALISTA - POPULISTA

El paternalismo-populismo puede adoptar la forma de “un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clase no obrera con importante influencia en el partido y sustentador de una ideología anti statu quo” (Cf. Gino Germani, Torcuato Di Tella y Octavio Ianni: *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*, México, Ediciones Era, 1973). Igualmente puede ser un estilo de gobernar o una manera de hacer política que juega con los datos de la realidad pero los altera y los manipula en función de los intereses electorales o políticos de quien se erige como el líder de la sociedad. De acuerdo con la opinión de los autores citados, “las fuentes de fuerza o nexos de organización del populismo son los siguientes: 1. Una élite ubicada en niveles medios o altos de la estratificación y provistas de motivaciones anti statu quo. 2. Una masa movilizada, formada como resultado de la revolución de las aspiraciones. 3. Una ideología o un estado emocional difundido, que favorezca la comunicación entre líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo”. En algunos países, no obstante, el paternalismo-populismo es el resultado “de una transacción entre una oligarquía en descenso, pero que guarda el control de la economía, unas clases medias en ascenso, pero sin autonomía para introducir cambios en

la estructura económica e institucional, y sectores populares urbanos movilizados, pero de presencia aún difusa y desorganizada” (Norbert Lechner: *La crisis del Estado en América Latina*, Caracas, El Cid Campeador, 1977, p. 57).

El paternalismo-populismo o simplemente populismo como lo llamaremos de ahora en adelante para facilitar la lectura, toma cuerpo en aquellas “estructuras donde la dirección asume el papel del padre que resuelve todos los problemas y el resto del conjunto asume el papel de hijos dependientes que esperan y reclaman del padre la solución de los mismos” (Cf. Thomas Suavet: *Dictionnaire économique et social*, Paris, Les éditions ouvrières, Initiation économique N° 3, 1962, p.312). El populismo parece descansar en un mecanismo psicológico en virtud del cual el hombre fuerte, el partido poderoso, el padre protector, se sitúan por encima del hombre débil, del militante, del hijo desvalido para darles, precisamente, lo que estos no tienen: fortaleza, poder, seguridad. Por esta vía, las instituciones oficiales dejan de ser entes al servicio de todos, particularmente organizaciones sobre las que todos tenemos derechos, para convertirse en instrumentos que prolongan la “generosidad” de quienes las presiden. A su vez, en el caso de los partidos políticos, estos dejan de ser medios por conducto de los cuales se persiguen fines políticos trascendentes, para convertirse ellos mismos en fines. Lo cierto es que se establece una relación de fidelidad entre los individuos y la institución oficial más representativa o el partido que deja de lado toda racionalidad y toda ponderación de valores intelectuales. Este mecanismo psicológico de protección y de adhesión que suscita el populismo no se mantiene en virtud de efectos mágicos o religiosos. Tiene que ser mantenido a través de favores materiales o de “servicios” que atan y hacen dependientes a los que los reciben de los que los otorgan. En virtud de esta solidaridad, los nexos o las motivaciones de carácter ideológico o doctrinario, terminan siendo reemplazados por el interés pragmático. La dependencia psicológica provocada por el paternalismo es remachada por prácticas populistas como el “asistencialismo” y el “clientelismo”. Es que, por regla general, el populismo tiene su expresión en una dirección centrada en mantener su popularidad, para lo cual se hace clientelista, igualitaria y benefactora. Se genera así una estructura donde los miembros de la co-

munidad se relacionan con ella en función de los beneficios de tipo económico, social y político que la misma ofrece, y no en función de sus responsabilidades y compromisos con las metas básicas de esa estructura o del país. Gustavo Martín, en su interesante trabajo “*Ensayos de Antropología Política*” (Caracas, Fondo Editorial Tropykos, Serie Ensayos, 1984) citando a Meter Wiles, enumera los siguientes rasgos del populismo: el populismo se organiza mal y es poco disciplinado; su ideología es imprecisa; adquiere las formas de un movimiento anti-intelectual; se opone a la lucha de clases en el sentido marxista; se interesa en el fenómeno de los compromisos sociales; el poder corrompe y aburguesa a los movimientos populistas con una celeridad que asombra; la teoría económica del populismo es el cooperativismo; el populismo se opone a la desigualdad económica y social, pero acepta las desigualdades promovidas por las instituciones en las cuales se organiza electoralmente; el populismo es contrario a la ciencia y a la tecnocracia.

Como lo señaló Darcy Ribeiro en uno de sus trabajos (Cf. *El dilema de América Latina*, México, Siglo XXI, 1971), los liderazgos populistas han surgido como producto de sociedades que han experimentado un proceso de modernización refleja y de urbanización precoz y caótica y se caracterizan por la magnitud demagógica en que actúan. Pero el populismo es fundamentalmente contradictorio y esas contradicciones se ponen al descubierto según el discurso utilizado para enfrentar las diferentes circunstancias económicas, sociales o políticas en que le corresponde actuar o al comparar las expectativas de las ofertas políticas que se hacen y las posibilidades reales de recursos de que se dispone para acometer ese programa, a menos que se dé una situación como la venezolana de estos comienzos del siglo XXI en que los recursos a disponibilidad del gobierno parecen inagotables gracias a una coyuntura particularmente favorable en el comportamiento de los precios mundiales del petróleo.

De todas maneras, en el largo plazo la situación se agrava porque el populismo hace más hincapié en la distribución de la riqueza y en el consumo que en la producción y en la productividad. En el fondo, el populismo es una expresión de subdesarrollo político en el que ciertas conductas políticas ideologizadas, sin coheren-

cia y sin bases conceptuales de sustentación, se sustituyen a proposiciones doctrinarias que, al menos en el plano teórico, son más sólidas y están establecidas.

Ahora bien, el paternalismo-populismo no es una característica exclusiva del chavismo. La experiencia democrática venezolana posterior a la muerte del general Juan Vicente Gómez se resintió de las tentaciones del populismo y en la etapa de nuestra historia reciente que hemos denominado democracia de partidos, el populismo ayudó a la consolidación de las instituciones democráticas pero terminó por trastocar el entramado conceptual e institucional del sistema. En un interesante trabajo publicado en la primera época de El Diario de Caracas (edición del 17/10/1993, p.16) por Leonardo Vivas, titulado “El populismo es parte de la génesis de Latinoamérica” se hacen comentarios que nos parece pertinente resumir: 1) “...más allá de las sutilezas socio-políticas, el populismo ha representado en nuestro continente opciones de fuerte contenido nacionalista, construidas con base en un rechazo de la política exterior estadounidense e interpretando –a veces de manera delirante– las expectativas de incorporación a la vida política de vastas capas rurales o urbanas en proceso de serlo”; 2) “De hecho, es quizás la simbología popular, la apelación a un pueblo “pobre” o “desguarnecido” al cual se quiere brindar abrigo o cobijo, lo que más ha destacado en todos los casos en que el populismo ha irrumpido con vigor en la política latinoamericana”; 3) “El otro polo del populismo han sido los regímenes militares, los cuales han jugado siempre, con su mezcla de orden y sangre, un papel de péndulo equilibrador”; 4) “La economía política del populismo tuvo dos caras: el cepalismo como estrategia económica y una suerte de keynesianismo tropical para el corto plazo, bajo el supuesto “universal” de que una estimulación de la demanda interna generaría rápidamente un mejoramiento del ciclo económico y de la distribución del ingreso”; 5) “...las políticas distributivas y de crecimiento hacia adentro del populismo-cepalismo distribuían por un rato pero los desequilibrios fiscales y las restricciones del crecimiento hacia adentro hacían más desigual el ingreso y profundizaban la injusticia social en el largo plazo”; 6) “la herencia económica del populismo puede reducirse a varias fórmulas ensayadas incesantemen-

te en uno y otro país” que resumimos así: a) redistribuyes mientras creces, se pide al estado que instaure mecanismos económicos que compensen las diferencias en el ingreso real de la población, haciendo abstracción de los incrementos de productividad, b) importa crecer no cómo creces, c) el gasto público es elástico, con lo cual se espera cubrir una gama casi ilimitada de actividades por cuenta del estado, d) mientras más estén contentos mejor, para lo cual se arbitra toda suerte de medidas de carácter redistributivo o compensatorio.

VII. EL CARÁCTER

AUTORITARIO Y PERSONALISTA

Referirse al autoritarismo y al personalismo para caracterizar el ejercicio del poder en el escenario sobre el que estamos escribiendo es hablar de las dos caras de la misma moneda.

En términos políticos, un régimen autoritario es aquel en que el ejercicio de la autoridad no deriva originariamente de la ley sino de la acumulación de poder que se tenga en un momento dado, aun cuando luego se haya revestido de legalidad. La autoridad de un líder, de un jefe o de un conductor social puede tener su fuente en un hecho electoral o en la racionalidad conforme a la cual actúa. Puede ser el resultado de la experiencia o de la sabiduría, cuando estas son objeto del reconocimiento y del respeto general del grupo o comunidad en los que quien ejerce la autoridad se mueve. En todo caso, “el autoritarismo surge cuando la institución se borra delante del hombre. Fundamentalmente la autoridad es el reino del jefe. Su forma más perfecta la tenemos en el cuadro de un poder individualizado, donde todo el orden político descansa en la voluntad personal del individuo que gobierna. Es en este sentido que podemos decir que es propio del autoritarismo tender a la individualización del poder” (Cf. Burdeau, Georges: *Traite de Science politique*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1966-1974). Pa-

ra detectar el autoritarismo es preciso que seamos capaces de distinguir la esencia de las formas. Un régimen autoritario puede estar revestido, antes, durante o después de su nacimiento, de formas democráticas o jurídicas. En la antigüedad romana, la dictadura era una respetable institución en virtud de la cual se investía a un magistrado con la autoridad suprema del Estado para que la ejerciera en momentos difíciles para la República. Simón Bolívar, al final del sueño gran-colombiano, se hizo proclamar dictador con el sentido romano del término, aun cuando el ejercicio del poder en la coyuntura en medio de la cual dio semejante paso haya resultado sin el brillo y la grandeza que tuvieron la mayoría de las ejecutorias públicas de El Gran Venezolano. Desde otro punto de vista, no es nada complicado demostrar que casi todas las más crueles y obscenas dictaduras que se han conocido en la historia, particularmente en la de nuestra América Latina, siempre se las arreglaron para tener su propia Constitución, sancionada por un Congreso o Asamblea Constituyente que actuaba bajo la vigilancia de un Poder Judicial, todos sometidos a la voluntad del jefe.

El autoritarismo es de filiación absolutista pero dentro de las condiciones y características propias del tiempo en que se ha manifestado. Corresponde, básicamente, a un período en el que las formas absolutas del ejercicio del poder han dejado de ser las dominantes en el mundo. Por lo general, el autoritarismo siente la necesidad de construirse una estructura política en la cual las pretensiones ideológicas o doctrinarias ocupan un lugar prominente.

Por esa razón, aun cuando en el fondo exista algún grado de identidad con los regímenes monárquicos o despóticos, el emparentamiento del autoritarismo es mucho más evidente con los gobiernos que se inscriben en la línea de sucesión que abrieron, en tiempos más recientes, el bonapartismo francés, el fascismo italiano, el nacional-socialismo alemán, el falangismo español y, en Sur América, el peronismo argentino. En ciertas coyunturas históricas, asociadas a graves crisis políticas, a profundos desajustes sociales o a devastadoras calamidades económicas, se crean las condiciones para que emerjan, muchas veces en medio del calor popular, formas autoritarias de gobierno. Y en la extraña mezcla que han resultado ser en ciertos espacios geográficos los regímenes autoritarios, unos cuan-

tos créditos hay que reconocerle al llamado “socialismo real”. Esa doble y aparentemente contradictoria manera de llamarse “dictadura del proletariado” o “democracia popular” permitió que al calor de un aparato burocrático impresionante, de poderosos ejércitos, de un refinado basamento doctrinario y en nombre de la clase obrera surgieran gobiernos como el de José Stalin en Rusia, el de Nicolás Ceaucescu en Rumanía, el de Fidel Castro en Cuba, o las aberraciones absurdas de un Kim Il Sun en Corea del Norte o de un Pol Pot en Camboya. Totalitarismo los llamó en su momento la crítica procedente de los lados del pensamiento socialcristiano.

Hay momentos en la historia de los pueblos en que las insuficiencias de las democracias llaman a los gobiernos fuertes. Capas cada vez más amplias de la sociedad comienzan a añorar los tiempos en los que “la vida era segura”, cuando “se podía dormir con las puertas de las casas abiertas”, cuando “había trabajo” y “se vivía bien y barato”. Esto lo escuchamos en los últimos tiempos más de una vez en Venezuela, asociado al recuerdo del gobierno del general Pérez Jiménez y, en España, referido al régimen franquista. La gente comienza a pedir, primero en tertulias íntimas y luego abiertamente, que se acabe con la corrupción en la administración de los recursos públicos, que los servicios públicos funcionen así sea a costa de una dosis grande de coacción y de temor, que se cumplan y se hagan cumplir las leyes con dureza, que se mantenga a raya y se combata el delito sin grandes miramientos, que se realicen grandes obras, etc. Las frustraciones colectivas, la irritación generalizada contra los gobiernos y los resentimientos sociales comienzan a darse la mano con el populismo y con las prédicas paternalistas. El líder providencial aparece entonces, también por lo general como un mesías vestido de militar o surgido de entre las filas de las fuerzas armadas preexistentes o que se organicen en la ocasión. Y en estas condiciones, no resulta extraño ver asociados al nuevo hombre fuerte a antiguos luchadores sociales y a organizaciones políticas de la izquierda tradicional que han soñado toda la vida con la revolución social y que están dispuestos a demostrar que el autoritarismo en ciernes es el rostro particular de esa revolución.

Si se acepta que el autoritarismo es el resultado del fracaso de la democracia, tenemos que concluir que la viabilidad de aquel

es función de la capacidad, incapacidad o dificultad de recuperación de ésta última. Cuando hablamos de fortaleza o de debilidad de la democracia, de sus fracasos o de sus éxitos, de su vitalidad o de su fragilidad, no pensamos tanto en la existencia o en la ausencia de una cultura democrática sino en la capacidad de funcionamiento de las instituciones democráticas. La cultura política de los italianos, de los españoles y de los alemanes no pudo impedir la entronización en el poder de Benito Mussolini, de Francisco Franco y de Adolfo Hitler. Lo que en realidad facilitó ese resultado fue la crisis de las instituciones democráticas junto a un momento particularmente delicado de las relaciones internacionales y la existencia de un clima social capaz de hacer perder a sectores importantes de la población el sentido de la racionalidad. La viabilidad del autoritarismo está relacionada con el grado de deterioro y de conflictividad social que prevalezca en las comunidades democráticas. Si en la vida de una sociedad que se reclama democrática se establece de manera más o menos estable un clima de irritabilidad social por causa de necesidades insatisfechas, promesas incumplidas y acumulación de problemas sin resolver, no es de extrañar que comiencen a aparecer signos con una carga política autoritaria. Y hay que tener presente que la fuerza bruta ha aprendido a dominar el arte del disimulo. El autoritarismo montañés de antaño se viste hoy con los mismos trajes de la democracia. La lucha de clases, sin llamarla de esta manera, puede ser estimulada y aprovechada en beneficio del poder personal. El autoritarismo una vez establecido puede adquirir el refinamiento requerido para prolongar su permanencia. Por eso es bueno subrayar que cuando aludimos a la viabilidad del autoritarismo, no sólo hacemos referencia a las condiciones que pueden permitir su apareamiento y consolidación, sino a los mecanismos que logra desarrollar para perdurar una vez alcanzado el poder.

Miremos ahora la otra cara de la moneda. La historia es, en definitiva, una relación (cronológica, analítica, explicativa o como se quiera llamar) de circunstancias humanas. No existe una historia de los animales o de las plantas disociada de la presencia del hombre. Otra cosa es la discusión, muy vieja por lo demás, acerca del papel del individuo en la historia. Los historiadores que piensan más en procesos que en gestas personales; más en tendencias que en acci-

dentes; aquellos que se empeñan en poner de relieve los rasgos objetivos frente a la subjetividad de quien escribe o es estudiado, han ensayado la historia de los hechos y de los procesos (sociales, económicos, políticos), la historia de las ideas, de la ciencia o de las ciencias y de las teorías. Al final, no obstante, uno tiene la percepción de que todas terminan siendo, en última instancia, la historia de los grandes hombres. Esto resulta más evidente cuando se examinan críticamente los regímenes políticos. El personalismo aparece entonces como un acompañante frecuente de la acción de quienes dirigen naciones, pueblos e instituciones. El personalismo no debe confundirse con el liderazgo sino cuando este degenera en una sobrevaluación de los rasgos de quien lo encarna. El personalismo acecha constantemente al liderazgo y si quien ejerce el poder o lo pretende cae en cuenta de que existe a su alrededor una debilidad institucional más o menos generalizada junto con una baja estima personal de los individuos, las condiciones aparecen dadas para que el personalismo emerja con gran fuerza.

A veces el personalismo es el producto del voluntarismo o de las actitudes y tendencias psicológicas de ciertas personalidades. No obstante, hay condiciones objetivas que en más de una ocasión lo precipitan. Maurice Duverger, hablando de la monarquía republicana, comenta que "...en ocasiones, el pueblo elige, ya sea directamente o por medio de diputados, al que será el jefe real del gobierno y que gozará de una considerable autoridad... Así pues aparece lo que un autor inglés anterior a mí ha denominado monarca elegido; es decir, el poder se concentra en manos de un hombre que es elegido por el pueblo... el resultado de todo ello es que se llega a un sistema donde el poder está muy concentrado. En general, el jefe del gobierno es, al mismo tiempo de la mayoría parlamentaria; ostenta el poder ejecutivo y, de forma muy amplia, el legislativo"(Cf. *Ciencia Política*, México, Editorial Hemisferio, 1977). Por su parte, Antonio Gramsci, en sus *Notas sobre Maquiavelo* asienta que "...en cierto momento de su vida histórica, los grupos sociales se apartan de sus partidos tradicionales, es decir, los partidos tradicionales... no son ya reconocidos como expresión propia de su clase. Cuando se producen estas crisis la situación inmediatamente deviene delicada y peligrosa, porque se abre campo a las soluciones de fuerza, a la activi-

dad de potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos”. Pareciera que Gramsci estuviera pensando en las formulaciones de Max Weber quien desarrolló ampliamente el tema de los tipos de dominación y distinguió el tradicional, el racional burocrático y el carismático. “Este último se basa en supuestos atributos divinos, sagrados, históricos del jefe, el cual en virtud de ello ejerce un poder absoluto sobre el pueblo”(Cf. “Tipos de dominación”, en: *Ciencia Política* de Maurice Duverger y otros, México, Editorial Hemisferio, 1977).

Contra la emergencia del personalismo no es una garantía la existencia de un colectivo organizado bajo la forma de un partido político o de cualquier otra modalidad, por fuerte que este sea, ni la presencia de un soporte doctrinario o ideológico. El partido comunista en el poder, apoyado en la supuesta consistencia de la ideología marxista, no solamente no pudo impedir la aparición en los países del socialismo real del fenómeno llamado “culto a la personalidad” sino que lo promovió al convertirse en su propagandista principal. Por supuesto, la inexistencia del partido y de la ideología, facilitan enormemente que el personalismo pueda prosperar desde el poder, aparte de que no son pocos los casos de partidos políticos personalistas como el peronismo en Argentina o el chavismo en Venezuela. Cualquiera puede calificar la propensión al personalismo en un país en el que quien ejerce la jefatura del Estado ha llegado a esa posición acompañado de la voluntad mayoritaria de los votantes y a caballo de un amargo sentimiento de recriminación de gran parte de la población con respecto a quienes lo dirigían. Un hombre carismático cuyo apoyo social no se origina en una clase social o en una coalición de fracciones de ellas sino en un conglomerado social heteróclito, tierra abonada para los resentimientos de todo tipo, que se ha negado por antipatía estructural a contar con la ayuda de un partido político como apoyo de su acción pública porque en realidad repudia, por formación cultural, a todos los partidos. Alguien que en un momento del año dos mil, en medio de una actitud iracunda frente a las críticas que recibía llegó a decir que “estas campañas están orquestadas para tratar de debilitar la columna central de este proceso, que soy yo”.

VIII. EL CARÁCTER BONAPARTISTA

En el dominio de la Ciencia Política se ha convertido en una categoría científica el término “bonapartismo” como expresión de un tipo de régimen político transicional hacia formas históricas más estables. El término ha sido acuñado por los críticos a partir del extenso examen efectuado por Carlos Marx, entre diciembre de 1851 y marzo de 1852, bajo el título *El 18 brumario de Luis Bonaparte*, al proceso político vivido por Francia entre 1848 y 1851. Señala Roger Bartra (Ob. Cit) que “la teoría del cesarismo esbozada por Gramsci tiene por base el análisis de Marx en *El 18 brumario de Luis Bonaparte*; la ‘tercera fuerza arbitral’, que constituye la clase representada por Bonaparte, son los campesinos. Esta masa de producción, por el peculiar modo de producción que la caracteriza, no puede representarse a sí misma, por medio de asambleas o parlamentos, y recurre a formas carismáticas de representación de su poder político. ‘La influencia política de los campesinos parcelarios –dice Marx– encuentra consecuentemente su última expresión en la subordinación de la sociedad al poder ejecutivo’. De aquí la íntima conexión entre el campesinado y la función social de la burocracia civil y militar, y el papel preponderante de los militares y de los estratos parásitos en las situaciones que engendran las formas políticas del bonapartismo o

cesarismo”.

El bonapartismo expresa una situación en que las fuerzas políticas en lucha se equilibran de tal manera que aparece entonces la necesidad de un árbitro. La necesidad de ese árbitro puede sobrevenir por un agotamiento general de los factores que integran el bloque de poder dominante sin que en la escena política tradicional aparezca la alternativa de entre los componentes de ese bloque de poder. Esta hipótesis se perfiló claramente en nuestro país en el transcurso de los veinte años que precedieron el triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez Frías en 1998. El bloque de poder conformado desde 1958, aun cuando las fuerzas que lo constituyeron continuaban compartiendo la visión de la sociedad y del sistema político para regirlo, había perdido coherencia, voluntad y emoción para dirigir a la sociedad. Los partidos políticos que se turnaban en el ejercicio del poder daban muestras inequívocas de un estado de prostración espiritual que les había enajenado el respaldo activo de núcleos importantes de la población. Y en cuanto al comportamiento de las fuerzas sociales más estructuradas eran francamente inquietante las muestras que ofrecían. En la investigación sobre la pobreza adelantada por equipos de la Universidad Católica Andrés Bello, a la que ya hemos tenido oportunidad de referirnos, el descubrimiento tal vez más impactante fue haber logrado establecer que los ricos y los pobres, en nuestro país, “comparten buena parte de las formas de pensar, actuar y sentir...La desigualdad no existe en los cerebros...El 86,4% del sector A (los ricos) y el 92,6% del sector E (los pobres), decían desconfiar de los venezolanos y de las instituciones y estaban convencidos de que los utilizaban...Tales creencias entre quienes tienen más dinero constituyen un gran obstáculo para la superación de la pobreza, porque los cambios que se deben hacer en lo institucional, económico y político lo hacen las élites, y si las élites piensan como pobres ¿qué podemos esperar?” (Cf. *El Nacional*, Caracas: C-2, 29/10/1999). Esta conclusión debe haber sido terrible para los empresarios patrocinantes de la investigación y, seguramente, demoledora para los asistentes al simposio en el que fueron presentados los resultados (*Pobre país pobre*. CIED, Caracas, 1999). La puesta en relieve de la verdad que comentamos equivalía a un severo juicio sociológico y político del sector social que de diversas formas y maneras

pretendía o simulaba ser la vanguardia de la dinámica económico-social venezolana. Descubrir de pronto que Venezuela no tenía una clase dirigente, que este era un país socialmente al garete, era tan grave como confesar que cualquier cosa podía ocurrir en la conducción futura de la sociedad. La elección del doctor Rafael Caldera en 1993 para el ejercicio de un segundo mandato presidencial, a una edad en que normalmente los líderes deberían estar retirados o próximos a serlo, sin el apoyo del partido que había fundado y sostenido electoralmente por un archipiélago de pequeñas fuerzas que recibió el alegórico sobrenombre de “chiripero”, en nuestra opinión era un testimonio elocuente de que Venezuela buscaba un padre salvador, colocado al margen o por encima de los partidos y con *autoritas* o con autoridad suficiente como para hacer frente a los factores más influyentes de una sociedad que ya padecía una crisis de gobernabilidad.

Hablando de los sucesos de Francia a mediados del siglo XIX en la obra ya citada y con el lenguaje iconoclasta de quien se sentía como un contribuyente –si acaso no el principal– del desquiciamiento del sistema capitalista, Carlos Marx se refería al apoyo social bonapartista en los siguientes términos: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó el lumpemproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a libertinos arruinados, con equívocos medios de vida y de equivocada procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos licenciados de tropa, licenciados de presidio, esclavos huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, carteristas y rateros, jugadores, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritor-zuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos; en una palabra; toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la *bohème*; con estos elementos tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la sociedad del 10 de diciembre... Este Bonaparte que se erige en jefe del lumpemproletariado, que sólo en éste encuentra reproducidos en masa los intereses que él personalmente persigue, que reconoce en esta hez, desecho y escoria de todas las clases la única clase en la que puede apoyarse sin reservas, es el auténtico Bonaparte... Viejo ladino, concibe la vida histórica de los pueblos y los grandes actos de gobierno y de Estado como una come-

dia, en el sentido más vulgar de la palabra, como una mascarada, en que los grandes disfraces y las frases y gestos no son más que la careta para ocultar lo más mezquino y miserable” (Cf. “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, en: *Obras escogidas en dos tomos* de Carlos Marx y Federico Engels, Tomo I, Moscú, Progreso, 1966, pp.279-280).

Y hablando de Venezuela en este cerrar y abrir de siglos, puede sostenerse que el teniente coronel Hugo Chávez Frías no tiene el apoyo de ninguna de las clases sociales orgánicas que componen la sociedad venezolana. Cuando hablamos de clase social nos estamos refiriendo a grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un determinado sistema de producción, por su función en la organización social del trabajo, por el modo de vida que llevan y por la parte de la riqueza social que poseen.

La clase social supone un cierto sentido de pertenencia, unos patrones culturales comunes y unas formas más o menos propias de relacionarse con el sistema de instituciones y órganos del poder existentes. El espacio social que ocupa Chávez, en el que ha calado su mensaje y su estilo, el que lo ha acompañado electoralmente hasta ahora, está constituido por el pueblo empobrecido que la democracia no pudo redimir, por los núcleos marginales de nuestra sociedad, por los desempleados y por quienes sobreviven en el ejercicio de esa gama imprecisa y casi infinita de oficios que ha producido la economía informal. En su inmensa mayoría son capas o grupos sociales desclasados, que permanecen al margen del sistema de clases propiamente dicho y al que es posible mantener con dádivas a costa del Estado, envilecido por no tener que trabajar o simular hacerlo y recibir en contraprestación un estipendio por su transitoria lealtad. En esos núcleos de población caracterizados de la manera como lo hemos hecho, cala con facilidad el discurso chabacano y ordinario del Presidente y prenden como yesca los estímulos con los que el Primer Magistrado Nacional alimenta el resentimiento social.

El bonapartismo es, en definitiva, no representar a nada y a nadie y al mismo tiempo representarlo todo. Es ponerse por encima de las clases sociales y de los partidos, colocarse por sobre la religión y las instituciones. El rasgo bonapartista del chavismo es evidente y no sería una exageración sostener que la tesis del inspirador Norberto Ceresole de líder-ejército-pueblo está también imbuida de

bonapartismo. El presidente Chávez ha enfrentado a los viejos partidos de la democracia representativa venezolana, pero ninguna de las formas organizativas que se han concebido bajo su inspiración y mandato (Polo Patriótico, Movimiento Quinta República, Círculos Bolivarianos, etc.) es un escenario de pares sino agrupaciones que le están sometidas obsecuentemente. Chávez se ha enfrentado al movimiento sindical, al empresariado nacional agrupado en FEDECAMARAS, a los propietarios de los principales medios de comunicación social televisados y escritos así como a la jerarquía católica del país y ha terminado ubicado por encima de ellos.

El padre petróleo termina por explicarlo todo y, al mismo tiempo, de llenarlo todo de una gran artificialidad. Desde que en los años veinte se dio comienzo a la explotación comercial del petróleo a gran escala, en nuestro país hemos tenido dictaduras feroces, una larga experiencia democrática tutelada por los partidos, y desde 1999 hemos entrado en esta suerte de bonapartismo que nos gobierna, pero en esos ochenta largos años hemos sido incapaces de edificar instituciones fuertes y de crear una cultura política y económica sobre la base de valores estables colectivamente convenidos. Y todo porque el petróleo y no una sólida formación social ha garantizado la existencia de la República. En estas condiciones, ¿qué de extraño puede tener que sean los líderes o los caudillos y no los grupos sociales con un liderazgo colectivo los que conduzcan a la nación? Esta es la consecuencia de tener un Estado que se sobrepone a la sociedad y que puede asfixiarla o liberarla de acuerdo a sus conveniencias o al nivel de conciencia que tengan quienes gobiernan.

Cuando las sociedades viven de manera prolongada tribulaciones como las que desde hace tiempo acompañan a los venezolanos y entran en esos “huecos negros” históricos en que se va la luz, se pierden las perspectivas, la duda se apodera de todos los espíritus, la fe en el futuro se debilita y los ciudadanos así como las instituciones se mueven a tientas, suele producirse entre las gentes dos tipos de reacciones que no son excluyentes. Hay quienes buscan con angustia y desesperación un salvador y hay quienes se contentan con lavar sus frustraciones señalando a grandes responsables. Las dos actitudes buscan simplemente ahuyentar los demonios de la desesperanza pero no impiden que la historia siga el curso que pareciera es-

tarle prescrito por el destino.

CONCLUSIONES

Estamos firmemente persuadidos de que la democracia plural, participativa, con separación y autonomía de los poderes públicos, con vigencia plena del estado de derecho, con la ley como gran árbitro de los conflictos de derechos y de intereses, se reconstituirá en Venezuela. ¿Cuánto tiempo tomará ese desenlace? No lo sabemos y no queremos ni siquiera intentar contestar a lo que de momento es una adivinanza. Pero ese es un destino inevitable para nuestro país. De cierto sólo sabemos dos cosas. La primera, que el experimento chavista es inviable política, económica y socialmente como solución permanente a los problemas nacionales. La segunda, que la experiencia democrática vivida en nuestro país entre 1958 y 1998 no tiene ninguna posibilidad de ser reeditada. Como podrá comprenderse sin dificultad, estas no son dos afirmaciones gratuitas. Las sustentamos en la reflexión recogida en las páginas de este trabajo pero ellas mismas carecerían de significación para el colectivo nacional si la mayoría de los habitantes del país no hacen el esfuerzo de comprender y de identificar las fuerzas que nos trajeron hasta donde estamos y la naturaleza política del régimen en que desembocó el colapso de la democracia de partidos.

En el fragor de las luchas que se libran en Venezuela con-

tra el régimen chavista, más de una vez hemos escuchado decir y hemos leído, por parte de líderes opositores, la afirmación de que hay que pensar más en el futuro. Que después de seis años de gobierno bolivariano, vale decir que luego de constatar los resultados de una gestión administrativa más prolongada que la de los períodos constitucionales ordinarios del pasado, y luego de haber presenciado las derrotas reiteradas de la oposición, no tiene mayor sentido detenerse en el tiempo que pasó, sino hacer borrón y cuenta nueva y seguir adelante. Nuestra reacción interior ante ese punto de vista ha sido la de convencernos, cada vez con más fuerza, que mientras no tomemos la determinación de volver a recorrer el camino andado analíticamente, críticamente, será imposible pasar la página todavía abierta de estos últimos años. Los fracasos más recientes de los intentos unitarios de las fuerzas venezolanas de oposición al chavismo y la intrascendencia de las propuestas programáticas adelantadas al calor de esos esfuerzos unitarios tienen, en buena parte, su explicación en que se intentaron a partir de la hipótesis de que nada extraordinario había ocurrido en Venezuela después de 1998. Para los viejos partidos políticos y para las fuerzas integrantes del bloque de poder desplazado en 1999, la Venezuela de hoy y su gente son las mismas de hace siete, quince o treinta años atrás. Grave ingenuidad o tamaña tozudez la de mirar las cosas de ese modo.

Cuando las condiciones estén dadas y la sociedad venezolana comience la edificación de esa nueva democracia que vislumbramos, deberíamos estar en capacidad de afirmar, con argumentos, que el teniente coronel Hugo Chávez Frías y su gobierno le causaron mucho daño a la economía del país, a la integridad social de nuestra nación y a la bondad de espíritu de los venezolanos, pero que, en términos estrictamente políticos le prestaron servicios innegables a la reconstrucción institucional de Venezuela. Podríamos valorar esos aportes en los siguientes términos:

El muro de convencionalismos y de mediocridades; de conformismo; de engaños y de frustraciones; de pérdida de los horizontes del progreso humano en que se había convertido la fase final del sistema de democracia de partidos, fue demolido. Los innegables logros materiales y espirituales alcanzados por Venezuela y los venezolanos en cuarenta años de ejercicios democráticos fueron al final

opacados por una tupida red de prejuicios contra el sistema de libertades que los protagonistas principales del sistema contribuyeron a crear en el ánimo de la mayoría de la población. Todavía hoy, no solamente no es posible hacer el balance objetivo de esos cuarenta años sino que seguramente habremos de esperar un tiempo indefinido para establecerlo. Ahora bien, el chavismo, está demostrado ya, no pudo reemplazar el viejo sistema con nada, fue incapaz de llenar los vacíos que su propia acción creó, pero al destruir el cerco que impedía ver otras perspectivas y permitir la emergencia de otra generación de líderes, abrió los espacios para que la creatividad de los nuevos venezolanos refundara la República sobre bases sanas. Esto es lo que va a suceder en el porvenir.

Los pobres de Venezuela no volverán a ser olvidados por los demócratas. En nuestra opinión, el más grande fracaso de la democracia de partidos fue no haber podido resolver el problema de la pobreza en el país. Peor todavía, haber permitido que el número de pobres aumentara y que la sociedad toda se deteriorara en sus condiciones materiales de vida. Chávez tampoco ha podido resolver este drama y todo indica que bajo su gobierno se agravará pero ha quedado la enseñanza de que los sectores postergados de la sociedad tienen una capacidad de aguante muy grande pero con límites humanos que no es posible violentar. El régimen del teniente coronel Hugo Chávez Frías ha sido la moneda con la que pagaron los pobres de Venezuela la desidia y el irrespeto de la clase dirigente de la democracia de partidos hacia los sectores populares del país.

El empresariado nacional, salvo dos o tres excepciones, ha quedado al descubierto como un sector social que llegó a ostentar en el país posiciones, influencia y respetabilidad que no se merecía. La política de Chávez desnudó al empresariado de papel, formado a la sombra del estado benefactor, sin visión del riesgo empresarial, habituado a la realización de enormes ganancias en el corto plazo gracias al cálculo electoral de esperar grandes beneficios en el término de la duración de un gobierno constitucional. Nunca llegó a tener el empresariado venezolano de la segunda mitad del siglo XX la calidad para convertirse en la clase social dirigente de un proceso que, en definitiva, favorecía sus intereses. Careció de sentido de Estado y jamás llegó a asimilar que sus conveniencias pecuniarias suponía, exi-

gía la comprensión de los intereses sociales de los preteridos, más obligante para los verdaderos empresarios que para cualquier otro sector de la sociedad.

La intervención de PDVSA, con todo lo traumático que ha sido y a pesar del daño que ha causado a la base de la economía nacional (tan lesiva para el país como el paro petrolero del año 2003), de la carga de injusticia que ha significado para millares de familias venezolanas y para centenares de profesionales que habían alcanzado una altísima competencia validada internacionalmente, desató un nudo que se había formado en la valoración del papel de la principal empresa del país en el desarrollo nacional. PDVSA se había convertido en un estado dentro del estado. Desde mucho antes de la intervención y sin que se puedan justificar los daños gerenciales causados a la empresa a raíz de la acción del gobierno chavista, de los que seguramente se recuperará, en distintos sectores del país se habían expresado dudas en relación con la gestión de PDVSA, entre otros asuntos, sobre aspectos tan importantes y sensibles como los siguientes: a) haber actuado sin la lealtad que imponían los compromisos internacionales frente a los acuerdos de la OPEP relacionados con los precios del hidrocarburo y con los volúmenes de producción petrolera; b) haber diseñado y puesto en ejecución un vasto plan de inversiones para aumentar la capacidad de producción de la empresa a más de seis millones de barriles diarios para fines de la primera década de los años 2000, sin tener claridad sobre las consecuencias de la iniciativa; c) haber dado inicio a la apertura petrolera no en los sectores de mayor interés para Venezuela sino para las empresas que participaron en la misma; d) tal vez el señalamiento más grave, haber tenido participación en los asuntos políticos del país hasta el punto de elaborar planes que hacían suponer, cuando menos, proyectos personales, grupales o empresariales dentro de la casa matriz para asumir directamente la administración de los intereses nacionales; e) desde que la industria petrolera se convirtió en empresa pública, haber sido vista por núcleos respetables de la *intelligentia* nacional y por parte importante de la sociedad, como un centro de privilegios para quienes tenían la fortuna de ingresar y de permanecer en ella; f) ser percibida por el todo social, más allá de sus éxitos, como una entidad aislada, impenetrable para la mayoría de los venezolanos e

incluso para el propio Estado.

Con toda la carga de excesos que ha representado el enfrentamiento del teniente coronel Hugo Chávez Frías con los propietarios de los medios de comunicación social más importantes del país, especialmente con los dueños de las televisoras nacionales y de la gran prensa así como con muchos de los periodistas y trabajadores al servicio de esas empresas, ha resultado un alivio ver creadas las condiciones para separar las aguas que el partidismo mediocrizado había revuelto. Seguramente en el futuro vamos a tener medios de comunicación independientes, comprometidos con el deber de informar sin restricciones y decir la verdad (todas las verdades) al país sin límites absurdos, pero con linderos claramente establecidos entre los intereses empresariales y los intereses de la sociedad. La confusión perniciosa de la actividad política ejercida por dueños y por representantes de los dueños de los medios de comunicación, los llevó imperceptiblemente a usar, según sus conveniencias, el enorme poder de influir sobre la opinión pública. Allí se originó un conflicto de intereses absolutamente innecesario porque los medios de comunicación social, más allá de su carácter de empresas rentables, tienen obligaciones ineludibles con la sociedad y con un conjunto de principios éticos que no pueden ser vulnerados sin consecuencias. Esa lección sin duda que será registrada por los empresarios de la comunicación y esperamos que también, y en primer lugar, por los partidos y la dirigencia política que conduzca a la nueva Venezuela si no quieren ver comprometidos su autonomía y su rol dirigencial por las interferencias de los grandes medios.

Finalmente, los viejos partidos renovados o los nuevos que surjan si aquellos no llegan a tener el coraje, el sentido común y la voluntad para cambiar, tendrán que regirse conforme a pautas sanas en el desenvolvimiento de su vida interna y de acuerdo a reglas éticas precisas en sus relaciones con el Estado y con la sociedad. El revolcón que han sufrido los partidos en la confrontación con el chavismo seguramente logrará más efectos saludables que todas las críticas y reconvenciones que durante años les señalaron analistas e instituciones respetables del país. Sólo un esfuerzo muy grande de humildad y un propósito férreo de enmendar los errores harán olvidar en el ánimo de las mayorías nacionales las grandes omisiones de los

partidos en el pasado, las complacencias amorales que consintieron a muchos funcionarios públicos, el irrespeto que cometieron contra millares de jóvenes que se capacitaron para servirle al país pero que tenían antes que sufrir la humillación de jugarse su destino personal y profesional ante los encorbatados chafarotes de la burocracia interna o el tiempo que malgastaron en establecer el clientelismo como la plaga que envileció a la moral partidista.

AUTORES Y TEXTOS CITADOS

En orden de aparición en el texto

- SANOJA HERNÁNDEZ, Jesús. “El shock del lunes blanco”. *Bobemia*. Caracas: Edición N° 1333 Extraordinaria: 4-11. 06/03/1989.
- MUÑOZ, Freddy. “El Gobierno debe rectificar”. *Bobemia*. Caracas: Edición N° 1333 Extraordinaria: 42-47. 06/03/1989.
- MAZA Zavala, D.F. “Los efectos del programa de gobierno”. *Bobemia*. Caracas: Edición N° 1333 Extraordinaria: 48-51. 06/03/1989.
- RODRÍGUEZ, Miguel. *El impacto de la política económica en el proceso de desarrollo venezolano*, Caracas: 2002. s.p.i.
- BAPTISTA, Asdrúbal. *El relevo del Capitalismo Rentístico. Hacia un nuevo Balance de poder*, Caracas: Fundación Polar, 2004.
- BREWER CARÍAS, Allan. *Informe sobre la descentralización en Venezuela 1993*, Caracas: Arte, 1994.
- RIVAS, Ramón. *Acción Democrática en la historia contemporánea de Venezuela, 1929-1991*, Mérida, Venezuela: Universidad Popular “Alberto Carnevali”, 1991.
- DOMINGO, Carlos et al. *Venezuela: Renta petrolera, políticas distribucionistas, crisis y posibles salidas*, Mérida, Venezuela: Grupo Interdisciplinario de Estudios de Venezuela (GIEV), 1999, s.p.i.
- TORRES, Gerver. “Declaraciones”. *El Universal*. Caracas: 2-4. 19/03/2001.
- ————. *Un sueño para Venezuela ¿Cómo hacerlo realidad?*, Caracas: Banco Venezolano de Crédito, 2ª. ed. diciembre 2000.
- BETANCOURT, Rómulo y Otero Silva, Miguel. “Las huellas de la pezuña” (1929), en: *Acción Democrática en la historia contemporánea de Venezuela 1929-1991*, Mérida, Venezuela: Universidad Popular “Alberto Carnevali”, 1991.
- AD, COPEI, URD. “Pacto de Punto Fijo”. *El Nacional*. Caracas: D-3. 27/01/1998.
- Venezuela. Congreso Nacional. *Actas de la Comisión Bicameral Especial de Revisión de la Constitución*, Caracas: 1991-1992.
- CHIAPPE, Giuliana. “Reportaje”. *El Universal*, Caracas: 2-1, 18/04/ 1999.
- Venezuela. Iglesia Católica. *El Nacional*, Cuerpo Iglesia, Caracas: 1 y 2.

- 27/02/2005.
MENDOZA A, José. *Democracia, descentralización y participación ciudadana*, Discurso de incorporación a la Academia de Mérida. Mérida, Venezuela: 1998.
- BAPTISTA, Asdrúbal et al.- *Venezuela siglo XX: Visiones y testimonios*, Caracas: Fundación Polar, 2000.
- MÉNDEZ CASTELLANO, Hernán y Méndez, María Cristina de. “Estratificación social y biología humana. Método Graffar modificado”, en: *Archivos venezolanos de Puericultura y Pediatría*, Caracas: 49 (3 y 4): 93-110 Julio-Diciembre, 1986.
- HERNÁNDEZ, Katuska.- “21 millones de venezolanos están en situación de pobreza”. *El Nacional*, Caracas: A-19. 31/03/2005.
- BARREIRO C., Raquel. “81% de población es pobre”. *El Universal*, Caracas: 1-19. 31/03/2005.
- OCEI (República de Venezuela, Presidencia de la República, Oficina Central de Estadística e Informática), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas): *Informe sobre desarrollo humano en Venezuela*, Caracas: 1995, 1996 y 1997.
- VIVAS TERÁN, Ezequiel. *Diccionario de relaciones industriales*, Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo, Ediciones del Rectorado, 1979.
- España. Real Academia. *Diccionario de la Lengua Española*, Madrid: 21ª. ed. 1992.
- MORADOR-WETTSTEIN, Raquel. *Terminología operativa en Ciencia Política*, Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas, 1982.
- BUJARIN, Nicolás. *La economía política del rentista*, Buenos Aires: 1974, Cuadernos de Pasado y Presente, 57.
- CALELLO, Hugo. *Poder militar y Estado Nacional en América Latina*, Caracas: Rocinante, 1977.
- BARTRA, Roger. *Breve diccionario de Sociología Marxista*, México: Grijalbo, 1973.
- CABALLERO, Manuel. “Una teoría: el socialchavismo”. *El Universal*. Caracas: 1-8. 08/03/2005.
- GUERRA, José. “Dictadura del proletariado a la criolla”. *Descifrado*. Ca-

- racas: 4. 03/03/2005.
PERTH, Hans y Mills, C. Wright: *Carácter y estructura social*, Buenos Aires, Paidós, 1968.
- ANGULO F., Alejandro. "Gente sin Patria". *El Universal*. Caracas: 1-17. 04/03/2005.
- CALDERA, Rafael. "Posibilidad de un nacionalismo Latinoamericano" en: *América Latina, conciencia y nación*, Caracas: Universidad Simón Bolívar, Equinoccio, 1977.
- GERMANI, Gino; Di Tella, Torcuato, y Ianni, Octavio. *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*, México: Ediciones Era, 1973.
- LECHNER, Norbert. *La crisis del Estado en América Latina*, Caracas: El Cid Campeador, 1977.
- SUAVET, Thomas. *Dictionnaire économique et social*, Paris: 1962, Les éditions ouvrières, Initiation économique, N° 3.
- MARTIN, Gustavo. *Ensayos de Antropología Política*, Caracas: 1984, Fondo Editorial Tropykos, Serie ensayos.
- RIBEIRO, Darcy. *El dilema de América Latina*, México: Siglo XXI, 1971.
- VIVAS, Leonardo. "El populismo es parte de la génesis de Latinoamérica", en: *El Diario de Caracas*, Caracas: 17/10/1993.
- BURDEAU, Georges. *Traite de Science politique*, Paris: 1966-1974, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
- DUVERGER, Maurice et al. *Ciencia política*, México: Hemisferio, 1977.
- WEBER, Max. "Tipos de dominación", en: *Ciencia Política*, de Maurice Duverger et al. México: Hemisferio, 1977.
- MARX, Carlos. "El dieciocho brumario de Luis Bonaparte", en: *Obras escogidas en dos tomos*, de Carlos Marx y Federico Engels, Tomo I, Moscú: Progreso, 1966, pp.233-328.
- GARCÍA MORA, Luis. "Al límite". *El Nacional*. Caracas: A-4. 13/03/2005.
- MOLEIRO, Alonso. "El chavismo busca asesoría internacional para diseñar un programa socialista". *El Nacional*. Caracas: A-8. 13/03/2005.
- CABALLERO, Manuel. "Una buena línea divisoria". *El Universal*. Ca-